

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL
OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE
APROPIACIÓN ILÍCITA”**

PRESENTADO POR

Br. DEYVIS JIMÉNEZ NIEVES

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

Línea de Investigación: Legislación, Doctrina y Jurisprudencia Nacional.

Sub Línea de Investigación: Derecho Penal

Piura, Perú

2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**“INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO
ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA”**

**LOS SUCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS, ES
ORIGINAL EN SU CONTENIDO Y FORMA**



Dr. MANUEL ENEMECIO CASTILLO VENEGAS
ASESOR



Br. DEYVIS JIMÉNEZ NIEVES
EJECUTOR

Línea de Investigación: Legislación, Doctrina y Jurisprudencia Nacional

Sub Línea de Investigación: Derecho Penal

Piura, Perú

2018

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE LA TESIS

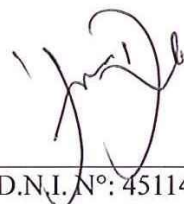
Yo, **DEYVIS JIMÉNEZ NIEVES**, identificado con D.N.I. N°.; 45114602, Bachiller de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS** y domiciliado en la Calle San Pablo 100-1 de la Urbanización Santa Rosa – Sullana – Sullana – Piura, celular: 975610472, e-mail: deyvisjimenez.n@gmail.com

DECLARO BAJO JURAMENTO que la tesis que presento es original e inédita, no siendo copia parcial ni total de una tesis desarrollada y/o realizada en el Perú o en el Extranjero, en caso contrario de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. 411° del Código Penal, concordante con el Art. 32 de la Ley N° 27444 y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor.

En fe de lo cual firmo la presente.

Piura, 04 de febrero de 2019




D.N.I. N°: 45114602

Art. 411°. - El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4°, inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación, para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



“INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO
ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA”

TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO

Dr. JACQUELINE SARMIENTO ROJAS
PRESIDENTA

Mg. LUIS HERNÁN CRUZ VÉLCHEZ
SECRETARIO

Mg. ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO
VOCAL

Piura, Perú
2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
040-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: "INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA", presentada por el Bachiller: JIMENEZ NIEVES DEYVIS con el asesoramiento del Dr. MANUEL ENEMECIO CASTILLO VENEGAS; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA ☒

DESAPROBADA ()

Con la mención de:


BUENO

- ☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- ☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 01 de febrero de 2019


DRA. JAQUELINE SARMIENTO ROJAS
PRESIDENTE


MAG. CRUZ VILCHEZ, LUIS HERNAN
SECRETARIO


MAG. BAYONA CASTRO, ROSA ESTHEL
VOCAL

DEDICATORIA

A Dios, quien con su luz celestial siempre guía mi camino, dándome sabiduría para afrontar los avatares de la vida y júbilo en cada victoria.

AGRADECIMIENTO

A mis padres por su apoyo en todo momento, a mis compañeros de estudio y sobre todo a mis maestros quienes me formaron no sólo en el conocimiento del Derecho, sino a amar la profesión con vocación y a ejercerla con sabiduría.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. **APROPIACIÓN ILÍCITA.-** Es la conducta de quien, “en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado”.
2. **BIEN JURÍDICO.-** En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o protege. Su carácter jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que prescribe una sanción para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. Sin la existencia de esa norma, que tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien pierde su carácter jurídico. El concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las categorías más recurrentemente empleadas por la doctrina penal de la parte especial. Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito.
3. **BIEN MUEBLE.-** Aquel elemento de la naturaleza, material o inmaterial, que puede desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza extraña y manteniendo su integridad.
4. **DERECHO PENAL.-** Es la rama del Derecho Público que regula la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia.
5. **ESTADO DE NECESIDAD.-** esaquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuridicidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura justificante

6. **FALTA.-** En Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.
7. **FRAGMENTARIEDAD.-** Principio que señala que el Derecho Penal va a tutelar aquellos objetos e intereses que son de importancia para la sociedad. Sin embargo, no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva, sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso signifique una vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia, es decir, bienes jurídicos que requieren de tutela penal para su desenvolvimiento en la sociedad.
8. **IUSPUNIENDI.-** Expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos.
9. **LEGALIDAD.-** Principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poderpúblico debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntadde las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones desus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley
10. **LEY PENAL.-** La que define los delitos y las faltas, determina las responsabilidadeso las exenciones y especifica las penas o medidas de seguridad que a las distintasfiguras delictivas o de peligro social corresponden.
11. **MEDIDAS DE SEGURIDAD.-** En Derecho penal, constituyen sanciones complementarias o sustitutivas de las penas, que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico pero no

culpable); pero, que de acuerdo con la teoría del delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad.

12. **PATRIMONIO.-**En el derecho se refiere a el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos vinculados a una persona, ya sea física o moral.
13. **PRINCIPIO DE LESIVIDAD.-** Principio por el cual la pena necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley; sin embargo, no cualquier lesión o puesta en peligro tiene aptitud para activar el sistema penal, sino sólo aquéllos comportamientos sumamente reprochables y no pasibles de estabilización mediante otro medio de control social menos estricto; en ése sentido, para la materialización de un delito se requiere que el sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave para ser objeto de sanción penal.
14. **REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL.-**Es considerada como el umbral mínimo de ingresos que debe percibir un trabajador que labora una jornada completa de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. El parámetro también se utiliza para determinar la subvención mínima que deben percibir aquellas personas que realizan modalidades formativas laborales en una jornada completa.
15. **TAXATIVO.-** Dícese de todo enunciado de proposiciones o supuestos de hecho, con sentido limitativo; es decir, que no es susceptible de ampliarse. Es lo contrario de ejemplificativo o enunciativo. En general, el carácter taxativo de una norma legal se determina en forma expresa mediante expresiones como “únicamente”..., “exclusivamente”..., etc.
16. **TIPICIDAD.-** Adecuación de una conducta a los presupuestos que detalla la legislación sobre un delito. Adecuación del acto humano voluntario efectuado por el

sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito.

17. ÚLTIMA RATIO.- Es una expresión latina que se traduce literalmente por “última razón” o “último argumento” lo que puede interpretarse como que es el último argumento posible en el tiempo o bien que es el argumento definitivo que hace innecesario seguir argumentando en el mismo sentido.

18. VALORACIÓN ECONÓMICA.- Consiste en la cuantía o significación económica que posee un bien u objeto en el mercado, lo cual lo hace merecedor de protección jurídico penal.

LISTA DE ABREVIATURAS

| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| T.P. | : | Título Preliminar. |
| CPP. | : | Código Procesal Penal. |
| CC. | : | Código Civil. |
| Const.P.P. | : | Constitución Política del Perú. |
| ART. | : | Artículo. |
| N CPP | : | Nuevo Código Procesal Penal. |
| Exp. | : | Expediente |

RESUMEN

El autor de la presente tesis realiza un análisis crítico y descriptivo respecto a la posible incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de Apropriación Ilícita, regulado en el art. 190 del Código Penal vigente.

Este análisis se fundamenta principalmente en los Principios de Lesividad y de Mínima Intervención Penal, que entre otros principios generales del derecho penal, constituyen limitación al poder punitivo estatal en el sentido que éste sólo debe de intervenir no ante cualquier lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos, sino sólo ante aquéllos comportamientos sumamente reprochables y no pasibles de estabilización mediante otro medio de control social menos estricto, pues de existir otras vías de solución menos lesivas, deberá recurrirse a ellas, constituyendo así el derecho punitivo el último recurso en el mantenimiento del orden y control social; siendo que en el caso del delito de Apropriación Ilícita, su descripción normativa no comprende como uno de sus elementos a la valoración económica de su objeto o bien mueble materia de apropiación, constituyendo una cláusula abierta, para su configuración, la apropiación de bienes muebles de escaso valor económico que ante la interposición de una denuncia y luego de verificada la concurrencia de sus elementos conllevaría al inevitable ejercicio de una acción penal que dista con la razón de ser de los principios antes citados; toda vez que, en este supuesto, la persecución del delito estaría orientada a sancionar la apropiación de bienes muebles ínfimos que por su escaso valor no han lesionado gravemente el bien jurídico protegido (Patrimonio).

A través del presente se busca otorgar al justiciable una solución alternativa a los conflictos generados por la apropiación ilícita de dichos bienes que pueden ser considerados una Falta y no un delito contra el Patrimonio, estableciéndose un límite legal en su descripción normativa que en este caso -se propone- esté constituida para todos aquéllos bienes que su valor no supere una Remuneración Mínima Vital (RMV), considerándose una falta y no un delito contra el Patrimonio, en atención a su escasa lesividad al bien jurídico protegido.

PALABRAS CLAVES

Derecho penal, delito, falta, bien jurídico, apropiación ilícita, lesividad, mínima intervención, remuneración mínima vital, patrimonio.

ABSTRACT

The author of this thesis performs a critical and descriptive analysis about the possible incorporation of the economic valuation of the object as a determining element of the Illicit Appropriation crime, regulated in the article 190 of the Penal Code, in force.

This analysis is based mainly on the Principles of Lesividad and Minimal Criminal Intervention, which among other general principles of criminal law, constitute a limitation to the state punitive power alluding to it only should intervene not before any injury or endangerment of protected legal entities, but just in the case of those highly reprehensible behaviors impossible to be stabilized by other means of less strict social control, since if there are other less harmful solutions, they must be resorted to, thus constituting the punitive law as the last resort in the maintenance of order and social control; therefore in the case of the Illicit Appropriation crime, its normative description does not include as one of its elements the economic valuation of its object or movable subject of appropriation, constituting an open clause, for its configuration, the appropriation of movable property of scarce economic value that before the filing of a complaint and after verifying the concurrence of its elements would lead to the inevitable exercise of a criminal action that is far from the rationale of the aforementioned principles; since in this case, the prosecution of the crime would be aimed at sanctioning the appropriation of paltry personal property that due to its low value has not seriously damaged the legally protected legal right (Heritage).

Through the present seeks to grant the defendant an alternative solution to the conflicts generated by the illegal appropriation of said assets that may be considered a fault and not a crime against the Estate, establishing a legal limit in its normative description in this case -it is proposed- it is constituted for all those assets whose value does not exceed a Minimum Vital Compensation (RMV), considering it a fault and not an offense against the Patrimony, in view of its scarce lesividad to the protected legal right.

KEYWORDS

Criminal law, crime, lack, legal right, illegal appropriation, lesividad, minimum intervention, minimum vital remuneration, patrimony.

ÍNDICE

| | |
|----------------------------|------|
| DEDICATORIA..... | iv |
| AGRADECIMIENTO..... | vii |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS | viii |
| LISTA DE ABREVIATURAS..... | xii |
| RESUMEN | xiii |
| ABSTRAC..... | xv |
| ÍNDICE..... | xvi |
| INTRODUCCIÓN..... | 19 |

CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

| | |
|---|----|
| 1. DERECHO PENAL..... | 21 |
| 1.1. POSICIÓN DOCTRINARIA DEL DELITO | 21 |
| 1.2. DEFINICIÓN DE DELITO..... | 22 |
| 1.3. ELEMENTOS DELITO | 23 |
| 1.3.1. La acción u omisión..... | 23 |
| 1.3.2. Tipicidad..... | 25 |
| 1.3.3. Antijuridicidad..... | 25 |
| 1.3.4. Culpabilidad..... | 27 |
| 1.3.5. Punibilidad..... | 29 |
| 1.4. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO..... | 30 |
| 1.5. EL PRINCIPIOS LESIVIDAD EN EL DERECHO PENAL | 33 |
| 1.6. SUBSIDIARIEDAD Y FRAGMENTARIEDAD DEL DERECHO PENAL . | 34 |

| | | |
|--------|---|----|
| 1.6.1. | Principio de subsidiaridad..... | 36 |
| 1.6.2. | Principio de fragmentariedad..... | 36 |
| 2. | LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO | 37 |
| 2.1. | DEFINICIÓN DE PATRIMONIO | 38 |
| 2.2. | IMPLICANCIA PENAL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO | 43 |
| 3. | EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA..... | 47 |
| 3.1. | ANTECEDENTES | 47 |
| 3.2. | DESCRIPCIÓN TÍPICA | 49 |
| 3.3. | MODALIDADES DELICTIVAS | 50 |
| 3.4. | BIEN JURÍDICO PROTEGIDO | 54 |
| 3.5. | TIPICIDAD OBJETIVA | 55 |
| 3.5.1. | Sujeto activo | 55 |
| 3.5.2. | Sujeto pasivo..... | 57 |
| 3.5.3. | Acción típica | 57 |
| 3.6. | TIPICIDAD SUBJETIVA | 59 |
| 3.7. | CONSUMACIÓN | 59 |
| 3.8. | PENALIDAD | 60 |

CAPITULO II

ASPECTOS METODOLÓGICOS

| | | |
|------|---|----|
| 1. | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | 62 |
| 1.1. | ENUNCIADO DEL PROBLEMA | 62 |
| 1.2. | FORMULACIÓN DEL PROBLEMA | 64 |
| 2. | OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN..... | 65 |

| | |
|---|----|
| 2.1. OBJETIVO GENERAL..... | 65 |
| 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 65 |
| 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN..... | 65 |
| 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 67 |
| 4.1. TIPO DE ESTUDIO | 67 |
| 4.2. TÉCNICA Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN..... | 67 |
| 5. HIPÓTESIS | 69 |
| 5.1. HIPÓTESIS GENERAL..... | 69 |
| 5.2. VARIABLES | 69 |
| 5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES..... | 70 |
| 5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES | 71 |

CAPITULO III

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

| | |
|--|----|
| 1. PROBANZA JURÍDICO-DOCTRINAL | 73 |
| 2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL | 77 |
| 3. ANÁLISIS EN EL DERECHO COMPARADO..... | 78 |
| 4. CONTRASTACIÓN O DISCUSIÓN DE RESULTADOS | 80 |
| CONCLUSIONES..... | 82 |
| RECOMENDACIONES Y APORTES..... | 86 |
| BIBLIOGRAFÍA | 88 |
| ANEXOS | |
| APÉNDICE | |

INTRODUCCIÓN

A través de la presente investigación se busca determinar la incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita, ya que, actualmente se evidencia que en virtud a la regulación de dicho ilícito penal no se considera la cuantía de los objetos materia del delito dentro de su configuración, sino, sólo la mera apropiación de los bienes muebles, lo cual deja abierta la posibilidad de que se denuncie e inicien investigaciones absurdas y a su vez que el estado gaste recursos en la persecución de hechos de poca trascendencia penal, debiéndose limitar este tipo de comportamiento a través de la cuantificación de los bienes que permita considerarlo como una Falta contra el Patrimonio y no necesariamente como un delito, en sujeción a la primacía de los Principios de Lesividad y Fragmentariedad o de Mínima Intervención, como limitación al poder punitivo del Estado, frente a la lesión de bienes jurídicos de escasa relevancia penal.

Para ello, se ha creído conveniente utilizar el tipo de estudio descriptivo – explicativo, dado que se propone identificar los elementos y características del problema de la investigación, esperando que por su demostración se llegue a conocimientos de tipo explicativo en la que se exponga con claridad la importancia de la Incorporación de la Valoración Económica del Objeto como elemento determinante del Delito de Apropiación Ilícita, analizando principalmente aspectos doctrinales del delito objeto de estudio, entre otros aspectos conceptuales que sirven de base para la formulación y entendimiento del problema planteado, arribando posteriormente a las conclusiones y recomendaciones respecto al tema.

En ése sentido, el presente trabajo obedece a la necesidad de determinar cuáles serían las implicancias de incorporar de la valoración económica del objeto dentro de la configuración tipifica del delito materia de estudio, estableciendo los alcances del Delito de Apropriación Ilícita y de los Principios de Lesividad y Fragmentariedad, en la regulación nacional, justificado en que la mera apropiación de los bienes muebles, sin un límite económico como su elemento configurativo, deja abierta la posibilidad de que se denuncie e inicien investigaciones absurdas y a su vez que el estado gaste recursos en la persecución de hechos de poco trascendencia penal, que por el contrario podrían ser bien utilizados en la persecución de ilícitos penales que lesionen gravemente los bienes jurídicos protegidos, en este caso el Patrimonio, pudiendo establecerse una solución alternativa al conflicto al regularse la apropiación ilícita de bienes muebles de escasa valoración económica como una Falta contra el Patrimonio, al igual que ocurre con otros ilícitos penales tales como el Hurto Simple o Daños Patrimoniales, como ya se dijo, en primacía de los Principios de Lesividad y Fragmentariedad.

EL AUTOR.

CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

1. DERECHO PENAL

1.1. POSICIÓN DOCTRINARIA DEL DELITO

La teoría general del delito según lo manifestado por Muñoz Conde “*es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción humana*”(MUÑOZ CONDE & GARCIA ARAN, Derecho Penal. Parte General, 2004, pág. 203).

Asimismo, la teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad (JESHECK, 1978, pág. 263) de un comportamiento humano sea a través de una acción o de una omisión, en estos términos dicho análisis no sólo alcanza a los “delitos” sino incluso a todo comportamiento humano del cual pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal, entonces, será objeto de análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad, así como los casos extremos en los que no obstante existir una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, el comportamiento humano resulte justificado, no reprochable, o bien, no punible.

Por otro lado la posición que la doctrina enfoca del delito es la relacionada a aquella acción que el ordenamiento jurídico establece como contraria a la convivencia social y que pone en riesgo los bienes jurídicos, aquellos elementos que la sociedad ha establecido como indispensable para la convivencia en paz y armonía sancionando de manera drástica a los autores.

1.2. DEFINICIÓN DE DELITO

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín *delictum*, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa (CABANELLAS DE TORRES, 2006).

Por otro lado, siguiendo a José Hurtado Pozo de acuerdo al principio de la legalidad, nadie puede ser sancionado si no ha cometido un acto descrito previamente en la ley como delito o falta. Tradicionalmente, el delito ha sido definido como la acción u omisión penada por la ley. Esta definición puramente formal figura frecuentemente en los antiguos códigos penales.

Asimismo, es una constante en la doctrina evidenciar que las principales definiciones del delito se efectúan en atención a esquemas prácticos basados en sus principales elementos de allí que se refieran a las conductas subsumidas en la ley que resulten contrarias al orden jurídico merecedoras además de la sanción penal, por lo que siguiendo la unanimidad de la doctrina diremos que el delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible que efectúa un sujeto vulnerando de manera directa o

potencial los bienes jurídicos que la sociedad ha establecido como merecedores de protección penal.

El código penal define al delito como las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por Ley (La acción activa o pasiva es la base de la conducta punible).

1.3. ELEMENTOS DELITO

A partir de la definición tradicional del delito, entendido este, como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible se han establecido los llamados elementos del delito, que no son sino aquellos componentes que sustentan e identifican un determinado comportamiento pasible de persecución penal, dado su carácter de delito. Así tenemos:

1.3.1. La acción u omisión

La acción es uno de los elementos estructurales del delito, uno de los requisitos generales de su concepto; y esto significa que si es elemento necesario no es factor suficiente: sin acción no puede existir delito; pero la existencia de la acción no basta por sí sola para que el delito surja. Entre las innumerables acciones que puede practicar cada individuo solo son delictuosas las que reúnen las demás cualidades y están aparejadas con los demás requisitos que integran la noción de la acción delictuosa. (CORNEJO, 2015, pág. 161)

Nos dice el Ángel Cornejo que “la acción puede consistir en un hacer o en un no hacer. En el primer caso se da la acción positiva, o propiamente dicha; y en el segundo la

omisión o acción negativa. La omisión se incluye en el concepto general de acción, porque es un hecho exterior que expresa la personalidad del sujeto. No sólo jurídica sino social y psicológicamente, la omisión es un comportamiento del hombre, como tal, una acción. Haciendo o dejando de hacer algo, obrando u omitiendo la actitud que era propia de las circunstancias, el sujeto manifiesta su personalidad”.

La conducta activa tiene las siguientes características:

- a) **Voluntaria.**- Si es involuntaria, la acción se excluye del campo delictivo.
- b) **Exteriorizada.**- si ocurre en el fuero interno y no llega a manifestarse, la acción también se excluye del campo delictivo.
- c) **La posibilidad de cambio en los delitos frustrados y en la tentativa.**- En estos delitos no es imprescindible que se produzca el cambio, en tal virtud quedan sujetos a sanción delictiva.

Como vemos la conducta debe estar dominada por la voluntad. Lo que excluye la conducta mecánica como ocurre en los supuestos de fuerza irresistible (condición de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente) (MUÑOZ CONDE & GARCÍA ARAN, pág. 218), acto reflejo (reacción automática y simple a un estímulo) o actos realizados en plena inconciencia (sueño, sonambulismo, hipnotismo). En estos supuestos no existe conducta, por tanto no hay delito.

Por otro lado, el estudio de la acción como elemento del delito, ya llevado también a plantear como elemento de la teoría del delito a la **OMISIÓN** la cual implica un dejar de hacer o actuar, en merito a la cual se puede cometer ilícitos en cualquiera de sus

modalidades, ya sea, en la omisión propia o impropia, ambas estudiadas y analizadas por nuestro Código Procesal Penal.

1.3.2. Tipicidad

La tipicidad viene a definirse como la adecuación del acto voluntario realizado por un sujeto, al contenido descrito en la ley como delito, o en otras palabras al tipo penal, siendo que en palabras de Muñoz Conde la *tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal*. (MUÑOZ CONDE & GARCIA ARAN, 2004, pág. 251)

Por otro lado, también podemos señalar que la tipicidad es el resultado de la verificación de si la conducta y lo descrito en el tipo, coinciden. A este proceso de verificación se denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete, tomando como base al bien jurídico protegido, va a establecer si un determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal. Siendo además que, no se debe confundir la tipicidad, que la aplica el juez, con la tipificación que efectúa el legislador, ni mucho menos con la calificación que es el procedimiento aplicado por el fiscal para determinar si un comportamiento constituye delito o no.

1.3.3. Antijuridicidad

En cuanto a la antijuridicidad, está dada por el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el Derecho, es decir, es un juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico.

La condición o presupuesto de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento valorativo. Por ejemplo el homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica como por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas, tal como lo regula nuestro código penal en el artículo 20° denominado causal de inimputabilidad.

En el esquema de la teoría del delito la tipicidad como ya se ha mencionado es la subsunción o adecuación de un acto humano al tipo penal descrito en la norma, siendo que la antijuridicidad, viene a ser un juicio valorativo de la conducta ante la norma. De ahí que delitos iguales en su revestimiento son valorados de distinta manera, por ejemplo en dos homicidios, si uno de ellos es en legítima defensa deja de ser antijurídico.

La valoración es sobre la conducta desarrollada del sujeto (valoración objetiva), se valora el impulso volitivo no el contenido de la voluntad, esta última es valorada subjetivamente dentro la culpabilidad.

Antijuridicidad formal y material

Por tradición se ha venido distinguiendo entre la antijuridicidad formal, que es aquella que viola lo señalado por la Ley, y la material, cuando se trata de una conducta antisocial.

En realidad una antijuridicidad material sin la antijuridicidad formal no tiene ninguna relevancia para el Derecho. Por otro lado la antijuridicidad material sirve de

fundamento para la formal, de tal modo que aquella conducta prohibida por la Ley debe serlo porque protege un bien jurídico (antijuridicidad material).

- **Antijuridicidad formal:** se afirma de un acto que es formalmente antijurídico, cuando a su condición de típica se une la de ser contrario al ordenamiento, es decir, no ésta especialmente justificado por la concurrencia de alguna causa de tal naturaleza (por ejemplo: defensa propia).

Por lo tanto, la antijuridicidad formal no es más que la oposición entre un hecho y el ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en el modo expuesto.

- **Antijuridicidad material:** se dice que una acción es materialmente antijurídica cuando, habiendo transgredido una norma positiva (condición que exige el principio de legalidad) lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger.

Es decir, es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. Por el principio de legalidad y de seguridad y certeza jurídicas, sólo los comportamientos antijurídicos que son típicos pueden dar lugar a una reacción jurídico penal.

1.3.4. Culpabilidad

Según Bramont-Arias *“la culpabilidad consiste en un juicio de valor concreto. No analiza al hombre en abstracto, desligado de toda realidad, sino frente a un hombre concreto. De ahí la importancia de la tipicidad y a antijuridicidad que determinan objetiva, subjetiva y normativamente ese hecho del cual responden”*. (BRAMONT-ARIAS, 2004, pág. 359)

Como elemento cuestionable del delito y en cuya sede ningún autor, según nuestra información, le denomina “responsabilidad penal”, tenemos que la culpabilidad según la teoría normativa que domina la doctrina, es el juicio de reproche que formula el juez contra el autor o participe de una acción típicamente antijurídica, por no haber ajustado su conducta a las exigencias del derecho pudiendo y queriendo hacerlo así. Es sobre la base de la posibilidad de hacer y también del deber de hacer, según las exigencias del derecho, que el juez formula el juicio de reproche que se traduce finalmente en la graduación y proporcionalidad de la pena; por lo cual no puede decirse, aunque se reconozca el ingenio traducido en la frase, que la culpabilidad radicaría, con tal definición, no en un acto de la gente sino en la cabeza del juzgador. (ROY FREIRE, 1998, pág. 95)

En tal sentido, y conforme lo refiere Percy García Caveró *“la culpabilidad no puede constituir una categoría desligada del injusto, pues toda imputación establece necesariamente una vinculación entre hecho y autor. (...) en la culpabilidad solo debe tenerse en cuenta los aspectos que permiten la imputación personal, es decir, la posibilidad de atribuir a una persona el rol sobre el que se ha realizado provisionalmente la imputación del hecho. Por esta razón para poder precisar los aspectos que se agrupan en la culpabilidad se requiere dejar en claro previamente que entendemos por imputación personal”*. (GARCÍA CAVERO, 2003, pág. 652)

Por otra parte, debemos señalar que la culpabilidad tiene dos formas: el dolo y la culpa. La primera es intención, la segunda, negligencia. Ambas tienen por fundamento la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad, y sin ésta, no hay delito, por ser la culpabilidad elemento del delito.

1.3.5. Punibilidad

La punibilidad significa cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena jurídica. La Punibilidad significa la posibilidad de aplicar pena, atendiendo a esto no a cualquier delito se le puede aplicar pena, en ese sentido resulta ser, a tenor de la teoría del delito, el último de sus elementos.

En ese sentido, la punibilidad como elemento del delito, se refiere a aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena, desde el punto de vista jurídico. Ya que ni siempre; ni ante cualquier delito es aplicable una pena; el elemento de la punibilidad define justamente, la posibilidad de que una pena sea aplicada, y de ahí la importancia del estudio de la punibilidad y el delito. Debemos decir que hay una parte de la doctrina que no considera a la punibilidad como un elemento del delito, manteniendo por ejemplo que se trata de una consecuencia de este, pero no de un elemento del mismo.

Por regla general, puede afirmarse que estamos ante un delito cuando se constata la existencia de un comportamiento típico, antijurídico y culpable. No obstante, en algunos casos excepcionales, y por razones de oportunidad o de política criminal, aún es preciso

comprobar la concurrencia o ausencia de algún factor adicional para afirmar que dicho comportamiento es punible. Tales factores pueden ser condiciones objetivas de punibilidad o procedibilidad, causas personales de exclusión de la pena o excusas absolutorias; en tales casos, aunque existe merecimiento de pena (juicio de antijuridicidad y de culpabilidad), el legislador ha considerado que no hay necesidad de pena.

1.4. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

Las consecuencias jurídicas del delito son definidas como todo aquello que se desprende de la verificación del delito como ente y de la relación de autoría que media entre éste y un sujeto el cual debe ser imputable (normativamente hablando a la vez que ser capaz de discernimiento y volición), pueden ser clasificadas desde distintos órdenes. Sin embargo, la doctrina clásicamente ha estructurado estas consecuencias como: penas, medidas de seguridad y responsabilidad civil.

a) Las penas

Que constituyen la consecuencia jurídica por excelencia de la comisión de un delito, siendo que para nuestro país el artículo 28° del CPLas clasifica en:

- La privativa de libertad;
- Restrictiva de libertad;
- Limitativa de derechos; y
- Multa.

La pena constituye a decir de muchos autores la reacción estatal más grave y drástica que el Estado puede implementar frente a la comisión de un hecho

delictivo, la misma que aplica previa actuación de los órganos jurisdiccionales, constituyéndose el más grave reproche del comportamiento contrario al orden jurídico.

Asimismo, conforme al artículo IX del TP del Código Penal la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora.

b) Las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad, en Derecho penal, constituyen sanciones complementarias o sustitutivas de las penas, que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico pero no culpable); pero, que de acuerdo con la teoría del delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad. Esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos. (ÁLVAREZ, 2015, pág. 56)

Podemos decir también que las medidas de seguridad son otras de las consecuencias jurídicas del delito en orden punitivo. Si bien es cierto no son medidas de orden represivo sino sólo asegurativo, su incorporación dentro de las consecuencias jurídicas del delito como niveles formales de control social, están dadas por su carácter post-delictual, en nuestro sistema penal.

Las medidas de seguridad como consecuencias jurídicas del delito, se introducen en el Perú en el Código Penal de 1924 (artículo 10° y ss.) optando, esta vez por un modelo dual en el sistema de sanciones y reacciones penales, siendo que en

nuestra actual regulación las medidas de seguridad se imponen con fines preventivos, terapéuticos, de deshabitación y de custodia y vigilancia.

Son dos los presupuestos materiales que deben fundamentar la imposición de las medidas: la peligrosidad criminal del sujeto y la comisión de un delito previo. Estos presupuestos constituyen también criterios limitadores de la gravedad y duración de las medidas. Éstas no podrán ser más gravosas que la pena correspondiente al delito previo realizado, ni exceder del límite necesario para prevenir la peligrosidad del autor.

Se utilizan dos criterios clasificatorios. En primer lugar, según la finalidad perseguida por la medida, se distingue entre las de carácter corrector (educativas o terapéuticas) y las asegurativas. En segundo lugar, se puede diferenciar las medidas por el contenido de estas: medidas personales (afectan al sujeto, y pueden ser privativas o no de libertad) y medidas reales (afectan a las cosas).

c) La responsabilidad civil

La responsabilidad civil se trata de una consecuencia jurídica indirecta del delito, es decir, constituyen una especie de consecuencias condicionadas a (el elemento condicionante será la existencia de un daño -entendido desde el derecho civil-).

En tal sentido, la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica del delito producida por el daño ocasionado al agraviado o víctima de un hecho criminal y que se impone según nuestro ordenamiento jurídico aun cuando el sujeto sea

absuelto del delito, tal como menciona el numeral 3 del artículo 12° del NCPP“(…) 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”.

Finalmente, debe tener presente también que según el artículo 93° del CP peruano ha establecido como contenido de la responsabilidad civil derivada del delito o falta, según sea el caso, los mecanismos de restitución, reparación del daño causado e indemnización (obligaciones de dar y hacer). En todo momento se exigen comportamientos positivos por parte del sujeto activo del daño.

1.5. EL PRINCIPIO LESIVIDAD EN EL DERECHO PENAL

Según el artículo IV del Título Preliminar (T.P.)del Código Penal “La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley.”, siendo que recoge el llamado principio de lesividad o puesta en peligro de los bienes jurídicos y cuyo sustento constitucional lo encontramos en los literales b) y d) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, para que una conducta sea considerada ilícita no sólo requiere una realización formal, sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado a un bien jurídico determinado.

Como manifiesta Bustos Ramírez, es un principio básico garantista del Derecho Penal Democrático, que garantiza que “sólo se persiguen hechos que afecten a un bien

jurídico, ya que es el principio básico que desde los objetivos del sistema determina qué es un injusto o un delito”. (BELLIDO CUTIZACA, 2012)

Esto significa que todos los preceptos penales deben proteger bienes jurídicos y que no se trata de que el Estado imponga una moral, una política o religión; es decir, no debe recaer sobre la libertad del ciudadano y por ello se debe tutelar intereses colectivos de toda la sociedad no de un grupo determinado. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

1.6. SUBSIDIARIEDAD Y FRAGMENTARIEDAD DEL DERECHO PENAL

Los principios de subsidiariedad y fragmentariedad en el derecho penal constituyen vertientes del Principio de Mínima Intervención, en virtud del cual el *Estado solo puede aplicar el derecho penal cuando resulte útil y necesario para mantener el orden democrático y social y en general para conservar la convivencia social, en tanto otras formas de control son insuficientes*. (VILLAVICENCIO TERREROS, 2004, pág. 95)

Del mismo modo, Villavicencio Terreros nos menciona que al referirse a este principio, la jurisprudencia nacional expresa que “el principio de Mínima Intervención del derecho penal es compatible con la del Estado Social, rechazándose la idea de un Estado represivo como protector de los intereses de las personas; ello enlazaría con la tradición liberal que arranca Beccaria y que postula la humanización del Derecho Penal: se parte de la idea de que la intervención penal supone una intromisión del estado en la esfera de libertad del ciudadano, que sólo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria - inevitable- para la protección del mismo ciudadano”.

Sabemos que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta que debe utilizarse cuando no haya más remedio. Por ello, el Derecho Penal sólo debe intervenir en la vida del ciudadano en aquellos casos donde los ataques revisten gravedad para los bienes jurídicos de mayor trascendencia, por ello en el caso de los delitos contra el patrimonio nuestra legislación ha considerado las faltas penales contra el mismo, las cuales tienen un nivel menor de afectación y por ende una reacción penal más débil estableciéndose parámetros económicos para poder determinar la comisión de un delito o falta, para el caso del hurto simple y daños contenido en el artículo 444° de nuestro Código Penal y que lo delimita tomando como parámetros la remuneración mínima vital, pues de lo contrario existirían un número ilimitado de acciones penales por este tipo mínimo de afectación que incluso puede ser perseguido por otras formas de control social.

Por eso, para que intervenga el Derecho Penal -junto a sus graves consecuencias- su presencia debe ser absolutamente imprescindible y necesaria, ya que de lo contrario generaría una lesión inútil a los derechos fundamentales. Así, supondría una vulneración de este principio, si “el hecho de que el Estado eche mano de la afilada espada del Derecho penal cuando otras medidas de política social puedan proteger igualmente e incluso con más eficacia un determinado bien jurídico”.

Este principio de la necesidad de la intervención estatal es, pues, un límite importante, porque permite al mismo tiempo evitar las tendencias autoritarias y ubicar al Derecho Penal en su verdadera posición dentro del ordenamiento jurídico. La ley no se transforma en un instrumento al servicio de los que tienen el poder punitivo, sino que las leyes penales, dentro de un Estado social y democrático de Derecho sólo se justifican en la tutela de un valor que necesita de la protección penal.

Estos límites a la función punitiva estatal, deben ser tomados siempre en cuenta por el legislador. Un aumento exagerado de criminalización de conductas, puede convertir al Estado en uno policial en el que sería insoportable la convivencia.

1.6.1. Principio de subsidiaridad

Se trata de la última ratio o extrema ratio, en el sentido que sólo debe recurrirse al Derecho Penal cuando han fallado todos los demás controles sociales. El Derecho Penal debe ser el último recurso que debe utilizar el Estado, debido a la gravedad que revisten sus sanciones. Los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del Derecho o por otras formas de control social. Ejemplo: una determinada política social, sanciones civiles, administrativas antes que penales. (VILLAVICENCIO TERREROS, 2004, pág. 96)

Así también lo cree la jurisprudencia: “con relación a la función que el Derecho Penal desarrolla a través de sus sanciones, ha de afirmarse su carácter subsidiario o secundario, pues la afirmación de que el Derecho Penal constituye la última ratio entre los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la sociedad, debería implicar, como lógica consecuencia, que el Derecho Penal está subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos gravosos para el individuo de que dispone el Estado; en este sentido, es difícil pensar en la existencia de un bien jurídico que sólo sea defendible por el Derecho Penal” (VILLAVICENCIO TERREROS, 2004).

1.6.2. Principio de fragmentariedad

Felipe Villavicencio en su artículo “Limites a la función punitiva estatal” indica que el carácter fragmentario del Derecho Penal consiste en que no se le puede utilizar para prohibir todas las conductas. El derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino las que revisten mayor entidad.

Para determinar la fragmentariedad de la selección penal se puede partir de los siguientes fundamentos:

- En primer lugar, defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos ataques que impliquen una especial gravedad, exigiendo además, determinadas circunstancias y elementos subjetivos.
- En segundo, tipificando sólo una parte de lo que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico.
- Por último, dejando, en principio, sin castigo las acciones meramente inmorales.

Este principio es una directriz político-criminal, ya que determina en el legislador hasta qué punto puede transformar determinados hechos punibles en infracciones o no hacerlo, por lo tanto, muy útil para la criminalización primaria.

2. LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO

El objeto de la presente investigación está relacionada al delito de apropiación ilícita, cuya tipificación se encuentra establecida en el artículo 190° del código penal, siendo junto a los tipos penales de hurto, robo, estafa y otros en los que recae el sistema de protección penal de los intereses patrimoniales particulares, lo que nos lleva a tener que

estudiar evidentemente al “Patrimonio”, pues es el bien jurídico de protección en este tipo de ilícitos penales, ya sea recayendo en la propiedad de una cosa mueble, una suma de dinero o un valor.

2.1. DEFINICIÓN DE PATRIMONIO

Cuando se aborda el concepto de patrimonio en el campo del Derecho Penal, se han mantenido diferentes posiciones que tratan de esclarecer su significado (PAREDES INFANZON, 2013, pág. 10), de allí que podamos sostener que el patrimonio puede ser entendido desde su concepción jurídica, económica, patrimonial y una concepción mixta o jurídico-económica, las cuales conforme al autor citado efectúan desde cada posición su definición del patrimonial y las cuales pasaremos a mencionar a efectos de poder tener una idea clara de su definición y sobretodo del tipo de concepción jurídica o teoría que nuestro sistema jurídico peruano recoge.

▪ Concepción jurídica del patrimonio

Según la doctrina, esta concepción del patrimonio fue la primera teoría que intento otorgar un concepto de patrimonio, teniendo como principal exponente a BINDIG para quien el patrimonio se traducía en la sumatoria de todos los derechos y obligaciones que poseía un sujeto de derecho. (SCHALACK MUÑOZ, 2008, pág. 263). Esta postura resta importancia al valor económico de los bienes de allí que cualquier perjuicio al patrimonio podría ser sancionado por el derecho penal acreditando la sola afectación a los derechos subjetivos del agraviado, lo que precisamente va en contra de nuestro planteamiento, pues en el delito de apropiación ilícita debería en nuestra posición ser cuantificado el valor de los bienes materia de la misma, pues ello en mérito a que conforme

los principios que dirigen y sustentan al Derecho Penal, este constituye la última ratio dentro de los sistemas y formas de control por lo que no cualquier afectación a los bienes jurídicos debe ser protegido sino solo aquellos en los cuales las otras formas de control social no son suficientes.

Asimismo, la doctrina francesa define tradicionalmente al patrimonio como “el conjunto de los derechos y de las obligaciones de una persona que se integran en su patrimonio. El patrimonio es lo que contiene esos derechos y obligaciones” (ATACHAHUA ALIANO, 2017, pág. 12).

Por su parte, conforme lo señala PAREDES INFANZON para esta tesis, el patrimonio está constituido por valores reconocidos como derechos subjetivos. Es decir, se considera que el patrimonio es el conjunto de las relaciones jurídicas, derechos, obligaciones y situaciones jurídicas, debidamente determinados por los derechos subjetivos.

Peña Cabrera citando a Miguel Fernández manifiesta que esta concepción jurídica de patrimonio corresponde a una época ya superada del pan-civilismo en la que se quiso convertir al derecho en un ente acéfalo de carácter dependiente; actualmente esta tesis no tiene aceptación en la doctrina (PEÑA CABRERA, 1995, págs. 50-51).

Por otro lado, esta teoría ha sido constantemente criticada, pues resulta muy restringida al momento de estudiarse las exigencias del tráfico económico, dado su carácter contrario a ello, por que dejaría de lado y desprotegería muchas situaciones comerciales e incluso el objeto de protección recaería en objetos sin valor dinerario o económico o

cuando menos que no podrían ser pasibles de cuantificación o en todo caso de protección, pues precisamente el delito de apropiación ilícita lleva consigo la materialidad de los bienes, en tanto de no acreditarse su existencia evidentemente no sería factible la configuración material del delito que estamos estudiando.

▪ **Concepción económica del patrimonio**

Los seguidores de esta concepción señalan que el patrimonio constituye la suma de bienes de una persona que quedan tras el descuento de las obligaciones, bajo ese contexto entonces el patrimonio desde una concepción económica corresponde a aquel poder factico del sujeto y al valor de los bienes o situaciones, por ello es que el patrimonio puede definirse como el conjunto de valores económicos de los que dispone una persona.

Otros autores consideran al patrimonio como un “conjunto de valores económicos que le corresponden a una persona”. En otras palabras, las teorías económicas del patrimonio coinciden por un lado en reconocer como parte del patrimonio de toda posesión que tenga valor económico al margen de que se derive un derecho o de la posibilidad de una constatación jurídica y por otro la posibilidad de compensación por el daño sufrido patrimonialmente y del lucro cesante, claro está apelado a criterios económicos y objetivos.

Pese a las pequeñas variantes presentes en las diversas formulaciones que del concepto económico de patrimonio se han ofrecido, todos los autores que adhieren a dicho concepto, según lo pone de relieve Cramer, consideran como incluidas en el patrimonio todas aquellas posiciones a las que es posible atribuir un valor económico, sin tomar en consideración su naturaleza jurídica. De este modo, la pertenencia al patrimonio de los elementos patrimoniales en particular, así como el valor de cada uno de estos, son

determinados a partir de criterios puramente económicos. (SCHALACK MUÑOZ, 2008, pág. 270)

Esta teoría acerca del patrimonio evidentemente al identificar el mismo con el carácter económico no hace más que identificarlo también con un aspecto objetivo y material que se identifica con los bienes que son pasibles de cuantificación y valoración económica, no basta que el sujeto tenga sobre ellos derechos y obligaciones sino que se acredita su materialidad.

Se critica esta concepción por la vaguedad de la noción de “valor económico”, de la cual parte, pues de cara a la norma penal, la inseguridad que ostenta lo hace desdeñable. Esta teoría económica, también resulta muy amplia porque hay situaciones que tienen contenido económico, pero no pueden ser protegidas por la norma penal (PAREDES INFANZON, 2013, pág. 11).

La principal objeción realizada contra esta teoría es que, al no considerarla necesidad de una relación jurídica lícita entre los bienes y su titular, permite las protecciones de posiciones patrimoniales ilegítimas o no reconocidas jurídicamente; el Derecho Penal entraría así, en conflicto con otras ramas del ordenamiento jurídico; lo que resulta absolutamente inaceptable dada la unidad básica de este. Con esta concepción, se cometería delito contra el patrimonio, cuando se afecten bienes que la supuesta víctima detenta ilícitamente, como el caso de bienes robados o sustraídos.

En contra de la teoría económica en su concepción extrema se han planteado diversas objeciones. Ante todo, la aplicación de criterios exclusivamente económicos al momento de fijar un concepto de patrimonio no hace más que repetir la remisión total a

parámetros extrapenales que se le reprochaba a la teoría jurídica, solo que en este caso dicha remisión se dirige no hacia el derecho civil, sino al sistema económico. Al apelar exclusivamente a consideraciones de hecho, rechazando de paso todo tipo de criterios normativos, la teoría económica pura se transforma en lo que Cramer ha calificado como un “positivismo fáctico” (SCHALACK MUÑOZ, 2008, pág. 277)

▪ **Concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio**

Las graves contradicciones valorativas a las que conduce la teoría económica extrema del patrimonio hicieron patente la necesidad de acudir a correctivos normativos que, partiendo también de un criterio económico, aseguraran al mismo tiempo la vigencia del principio de la unidad del ordenamiento jurídico. Surge así la llamada teoría mixta o jurídico-económica del patrimonio, hoy dominante en la doctrina alemana, así como en la española. Con todo, las diversas formulaciones que del concepto mixto se han ofrecido solo coinciden en este diagnóstico inicial, pero difieren notablemente al momento de fijar el contenido del correctivo normativo que se ha de aplicar.

Esta concepción como su nombre lo dice incluye en el patrimonio las cosas que tienen un valor económico en tanto se incorporen a la esfera de dominio o poder del sujeto en mérito a una relación jurídica lícita, dejando de lado las situaciones en las que el sujeto detenta determinados bienes o cosas a raíz de una acción o situación ilícita, sobre todo delictiva; asimismo no se considera dentro del patrimonio a objetos o elementos con valor netamente subjetivo (sentimental o afectivo).

Paredes Infanzón citando a Peña Cabrera, refiriéndose a esta tesis, señala que contrariamente a la concepción jurídica, comprende a todos los bienes patrimoniales que

ostentan un valor económico, independientemente, que sean o no derechos subjetivos; en tanto que, diferenciándose de la teoría económica, involucra receptivamente como bienes patrimoniales a aquellos que la persona dispone atendiendo a una relación jurídica.

Objeto material de un delito contra el patrimonio, como sería el caso del delito de apropiación ilícita solo puede serlo un bien con valor económico.

1. Para ser sujeto pasivo de un delito patrimonial no basta con que el sujeto tenga una relación meramente fáctica con la cosa, sino que es preciso que esté relacionado con ella en virtud de una relación protegida por el ordenamiento jurídico.
2. Por perjuicio patrimonial hay que entender toda disminución, económicamente valuable, del acervo patrimonial que, jurídicamente, corresponde a una persona.

Esta concepción respecto del patrimonio es la que ostenta una mayor acogida en la doctrina penal nacional y extranjera dado que garantiza de una mejor forma la definición del patrimonio no solo desde su vertiente jurídica o subjetiva sino también desde su postura económica u objetiva.

2.2. IMPLICANCIA PENAL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

En atención a la gravedad de las infracciones penales, estas pueden ajustarse a un régimen dualista: Delitos o faltas(o contravenciones).

a) Delitos

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín *delictum*, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa (CABANELLAS DE TORRES, 2006).

Los delitos contra el patrimonio se encuentran recogidos en el Título V del CP encontrándose dentro de los mismos el Hurto (art. 185°-187°), Robo (arts. 188°-189°), abigeato (arts. 189-A - 189-C), apropiación ilícita (arts. 190°-193°), receptación (arts. 194°-195°), estafa y otras defraudaciones (arts. 196°-197°), fraude en la administración de personas jurídicas (arts. 198°-199°), extorsión (art. 200°), chantaje (art. 201°), usurpación (arts. 202°-204°) y daños (arts. 205°-207°).

Por otro lado conforme la definición esbozada de los delitos estos constituye la acción típica antijurídica culpable y punible de mayor intensidad, que afecta los bienes jurídicos, por lo que la reacción estatal, a través del *iuspuniendi*, implica necesariamente una severa restitución de la norma penal para garantizar la paz social.

Siguiendo a José Hurtado Pozo de acuerdo al principio de la legalidad, nadie puede ser sancionado si no ha cometido un acto descrito previamente en la ley como delito o falta. Tradicionalmente, el delito ha sido definido como la acción u omisión penada por la ley. Esta definición puramente formal figura frecuentemente en los antiguos códigos penales.

b) Faltas

Así las faltas serán aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales pero que por su intensidad no constituyen delitos y si

bien es cierto existe gran identidad entre los delitos y faltas, la diferencia se da en la menor intensidad criminosa de las faltas. Existen muchas anotaciones al respecto, sin embargo la mayoría coincide que la diferencia es cuantitativa y se califica en función a la penalidad y a la vulneración de bien jurídico de menor intensidad.

San Martín Castro señala al respecto, que las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos. De modo tal que el criterio diferenciador entre delito y la falta se sustenta en un criterio puramente cuantitativo, pero que tiene en cuenta la gravedad de la infracción y la pena.

En ese sentido nuestro CP en su artículo 444° en atención al patrimonio dispone que:

“El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185° y 205°, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 189°-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa una remuneración mínima vital”

Como podemos apreciar respecto a la protección del bien jurídico patrimonio contempla una configuración a título de falta, pero solo la limita a los tipos penales relacionados con el hurto y los daños, más no así con los de apropiación ilícita, por lo que a la luz del ordenamiento jurídico cualquier apropiación indebida de bienes muebles sin importar la cuantía de los mismos poder ser perseguido como delito, el cual resulta otra de las implicancias de protección del patrimonio.

c) Principales diferencias entre delito y falta

- En primer orden la principal diferencia existente entre a que ambos es el aspecto cuantitativo, esto se refleja en la medida que el acto infractor lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos penalmente tutelados por el Estado, correspondiendo las de mayor intensidad a los delitos y la de menor a las faltas.
- Las consecuencias de esta distinción entre delitos y faltas son de diverso orden, a manera de ejemplo señalaremos algunas de dichas consecuencias contenidas en el artículo 400° del código penal.
- Su juzgamiento está a cargo de un Juzgado de Paz Letrado, excepcionalmente en lugares donde no exista este magistrado conocerá el Juez de Paz; mientras el delito se tramita ante el Juzgado Especializado en lo Penal.
- En las faltas, a diferencia de los delitos, por regla general no es punible la tentativa, conforme especifica el artículo 400° inciso 1 del Código Penal, decisión político – criminal, cuyo origen se ubica en el principio de mínima intervención del derecho penal.
- Solo responde el autor inmediato, mediato, y coautor. No se debe de incluir a los partícipes del hecho punible – instigador o cómplice.

- En el marco de las consecuencias jurídicas tenemos que el arsenal punitivo de las faltas se encuentra limitado a las penas restrictivas de derechos, prestación de servicios comunitarios y la pena pecuniaria- multa, a diferencia de los delitos por lo general se sanciona con pena privativa de libertad
- La prescripción de la acción penal y de la pena se encuentra también regida por reglas distintas que los delitos. La prescripción de la acción penal y de la pena opera en un año- plazo ordinario, respecto al plazo extraordinario se ha fijado en un año y medio en conforme a lo acordado en el plenario N° 1- 2010/CJ. 16/11/2010.
- El Ministerio Público no interviene en este tipo de proceso especial.

3. EL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA

3.1. ANTECEDENTES

En lo que corresponde a los antecedentes históricos de esta importante institución de nuestro derecho penal debemos partir, conforme lo hace la doctrina mayoritaria, del derecho romano, toda vez que, el mismo constituye el origen de muchas de las instituciones jurídicas que en la actualidad y en tanto nuestro sistema jurídico es tributario del sistema romano germánico.

De lo dicho podemos mencionar que el antecedente remoto tanto de los delitos de hurto como específicamente el de apropiación ilícita se encuentra en el “furtum” que *“consistía en la apropiación injusta de cosas muebles ajenas contra la voluntad de su propietario. Aunque en el derecho antiguo el delito se concretaba cuando la cosa se*

sacaba o removía del lugar en donde se encontraba originalmente (amotiorei), para la época clásica y posclásica el concepto se amplió y llegó a comprender eventos tan diversos como la sustracción misma, la retención contra la voluntad, el ocultamiento de la cosa o el encubrimiento de su autor, e, incluso, el uso indebido de las cosas que se tuvieran bajo custodia, conductas todas éstas que fueron englobadas bajo el concepto de contrectatiorei”. (SOLARTE RODRÍGUEZ, 2004, pág. 705)

Asimismo, la doctrina mayoritariamente hace también alusión a la definición de “furtum” dada por Paulo y según la cual era definido como “*contractioreifraudulosalucrifaciendi gratia velipsiusreietiamusus eius possessionisve*”, que traducido a nuestro idioma quiere decir “apropiación fraudulenta de una cosa con el fin de obtener un enriquecimiento, bien sea de la misma cosa, bien sea de su uso y posesión”.

Como podemos apreciar entonces, la figura de apropiación ilícita, históricamente, se consideraba dentro de la noción genérica de hurto. El Código de Manú y el Levítico la mencionan y solían equipararla al hurto. Fue el derecho penal canónico el primero en conocer el delito de apropiación indebida como hipótesis distinta al hurto. En el Código Penal francés se tipificó como delito dependiente bajo el nombre de “abuso de confianza”, sirviendo así de modelo al Código español de 1822. (PAREDES INFANZÓN, 2016, págs. 251-252)

En nuestro país, estaba regulada en el artículo 346 inciso 6 del Código Penal de 1862. En el Código Penal de 1924, la apropiación ilícita se encontraba prescrita en los artículos 240 al 242. Actualmente el delito de apropiación ilícita, también conocida como

delito de apropiación indebida, está tipificado entre los artículos 190 al 193 del Código Penal de 1991.

3.2. DESCRIPCIÓN TÍPICA

“Artículo 190.- Apropiación ilícita común

El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.”

La apropiación ilícita en palabras de Paredes Infanzón es el acto cometido por un agente delictivo, en su provecho o en el de un tercero; haciendo suya en forma indebida un bien mueble, una suma de dinero o cualquier objeto que se haya entregado para la guarda o depósito, a título de administración o cualquier otro título no traslativo de dominio, existiendo la obligación de devolver oportunamente el bien entregado en custodia (PAREDES INFANZÓN, 2016, pág. 252).

*“El delito de apropiación ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a un bien mueble que previamente había recibido el procesado por parte del sujeto pasivo; significando ello que la exigencia de entrega, devolución o uso determinado surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo probatorio debe girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia de apropiación y el agente”*Exp. N° 3114-97-Lima (BACA CABRERA, pág. 635).

3.3. MODALIDADES DELICTIVAS

El delito que venimos estudiando conforme a su regulación presenta una serie de modalidades típicas las cuales no son propósito de estudio de la presente investigación, ya que, la misma solo está enfocada desde el punto de vista de la apropiación ilícita genérica, por lo que solo se indicara de manera general cada una de sus modalidades

a) Sustracción de bien propio

El ilícito penal denominado también por la doctrina como “hurto impropio”, “apropiación de bien propio”, “sustracción de bien propio” o “desbaratamiento de derechos”, por el cual el propietario sustrae un bien de poder de quien lo tiene de modo legítimo, se encuentra previsto en el artículo 191° del Código Penal en los términos que siguen: *“El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años”*.

Su tipificación dentro del contexto de las apropiaciones ilícitas, y no dentro de las formas de hurto, tiene su explicación en relación a que, si bien es cierto que en este caso se procura una forma de sustracción, ella no se verifica sobre bienes ajenos, sino que por el contrario, el bien que se sustrae le pertenece al agente (lo que excluye el principio de ajenidad, que es el parámetro que mide la antijuridicidad de la acción en el hurto).

A diferencia nuestra el Legislador español tipifica esta modalidad delictiva como una forma de hurto (Art. 236). Consideramos que la fórmula nacional se ha estructurado con mejor técnica. Conforme a la representación típica contenida en el artículo 191°, comete hurto de uso “el propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero”. Se aprecia en consecuencia que la acción recae sobre el patrimonio, constituido por el bien mueble, de propiedad del mismo agente, pero cuya tenencia ha sido desplazada lícitamente a quien resulta agraviado.

b) Apropiación de bien perdido o tesoro

La figura delictiva por la cual el agente se apropia de un bien perdido o de un tesoro aparece regulado en el inciso 1 del artículo 192° del C.P en los términos siguientes:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación de días líbresele diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones siguientes:
1. Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Código Civil”.

Conforme lo señala la norma el hecho punible se configura cuando el agente o sujeto activo se apodera o hace dueño de un bien mueble que encuentra perdido o de un

tesoro o de la parte del tesoro que le corresponde al propietario del suelo, sin observar lo prescrito en nuestro Código Civil (CC).

c) Apropiación de bien ajeno

El inciso segundo del artículo 192° del Código Penal regula el delito que se configura cuando el agente dolosamente se apropia o se hace dueño de un bien mueble ajeno que ha entrado o ingresado en la esfera de su dominio a causa de un error, caso fortuito o por cualquier motivo independiente de su voluntad.

De la estructura del tipo penal se advierte que el hecho punible puede evidenciarse hasta en tres supuestos:

1. Cuando el agente se apropia de un bien que ha llegado o entrado en su dominio a consecuencia de un error. El delito aparece cuando el agente se da cuenta de que ha entrado en posesión de bien ajeno por error y pese a ello y en lugar de entregarlo o devolverlo a su propietario, se lo apropia. Caso contrario, si en determinado caso se llega a establecer que el sujeto no salió del error producido, resultará imposible que se le pueda atribuir penalmente algún delito.
2. Cuando el autor se apodera de un bien que ha entrado en su dominio a consecuencia de un caso fortuito. Es decir, se produce este supuesto ilícito cuando el agente sabiendo perfectamente que a consecuencia de un caso fortuito ha entrado en posesión de un bien que le pertenece al sujeto pasivo, no lo entrega o devuelve y, por el contrario, se lo apropia o apodera.

Es común en la doctrina peruana, el considerar que con la frase caso fortuito, nuestra ley penal se refiere a una fuerza de la naturaleza (viento, remolino, huaycos, etc.) que logra u ocasiona desplazar el bien mueble del dominio de su propietario hacia los dominios del agente, sin que haya intervenido la voluntad del sujeto pasivo para desprenderse del bien.

3. Cuando el agente se apropia o adueña de un bien que ha entrado en su esfera de vigilancia y dominio a consecuencia de un motivo independiente a su voluntad. Aquí el legislador ha establecido una fórmula que llena o colma los vacíos que pueden dejar las hipótesis ya analizadas. Por ejemplo, se presentará cuando dos caballos que se salen de la caballeriza por la noche y van a parar al predio del agente distante a cinco kilómetros.

d) Apropiación de prenda

Esta modalidad delictiva se recoge artículo 193° del CP señalando *“El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”*.

El delito se configura cuando el agente o autor, sin observar las disposiciones previstas en la ley de garantía mobiliaria, vende, se apropia o dispone de los bienes muebles que conforman el derecho real de garantía denominado prenda, constituida a su favor.

3.4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

A través del tiempo, las diversas legislaciones se han dividido: para unos el bien jurídico era la propiedad (C.P. francés de 1810, C.P. belga de 1867) en tanto que para otras, lo constituía el patrimonio (C.P. italiano de 1889). Tal división incluso permanece hasta la actualidad (por eje. Los C.P. de Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador prefieren a la propiedad, en tanto que los C.P. de Brasil, México, Guatemala y Panamá prefieren el patrimonio) trayendo como consecuencia lógica que los doctrinarios del Derecho Penal también adopten posiciones divididas.

El Código Penal peruano de 1863, señalaba como bien jurídico de los delitos patrimoniales a “la propiedad”, por su parte el Código Penal de 1924, considera delitos contra el patrimonio, la misma que se mantiene en el Código Penal de 1991.

En los delitos contra el patrimonio, el bien jurídico protegido lo constituye el patrimonio, entendido en sentido genérico y material como el conjunto de obligaciones y bienes (muebles o inmuebles) susceptibles de ser valorados económicamente y reconocidos por el sistema jurídico como pertenecientes a determinada persona. En tanto que en sentido específico para efectos de tutela penal, constituye patrimonio de una persona todos aquellos derechos reales (principales: posesión, propiedad, usufructo, uso y habitación, superficie y servidumbre; de garantía: prenda, anticresis, hipoteca y derecho de retención) y obligaciones de carácter económico reconocidos por el sistema jurídico.(PAREDES INFANZON, 2013, pág. 15).

El tipo penal de apropiación ilícita, se encuentra comprendido sistemáticamente, en el rubro de aquellos delitos que atentan el “patrimonio”, que de cuño afínca en la noción de “propiedad”, como es de verse con toda claridad en las figuras delictivas de hurto y robo al haberse incluido de forma taxativa el componente “ajenidad” en ambas estructuraciones típicas. Cuestión que no se advierte, en la tipificación reglada en el artículo 190° del CP, al no haberse incorporado dicho elemento, lo que, no quiere decir que la propiedad sea excluida como objeto de tutela jurídica, sino que en ciertos casos, el ataque antijurídico significará la lesión de otros derechos patrimoniales, inherentes a la expectativa de uso y disponibilidad; de por ejemplo, un dinero que se va a recibir de forma inmediata y que será recogido por otra persona, que en definitiva recalará finalmente en la propiedad del mismo; es así, que se funda el derecho de restituir un bien, a quien legalmente le corresponde su tenencia, de otro lado, se quiebra también derechos subjetivos del sujeto pasivo, cuando el agente procede a apropiarse del bien, sabiendo que este le fue entregado para un uso determinado.(PEÑA CABRERA FREYRE A. R., 2014, págs. 225-226).

En tal sentido, si bien en el delito de apropiación ilícita el bien jurídico protegido es el patrimonio, sin embargo le corresponde específicamente la propiedad de un bien mueble.

3.5. TIPICIDAD OBJETIVA

3.5.1. Sujeto activo

Puede ser cualquier persona que después de haber recibido el bien mueble, en virtud de un título no traslativo de propiedad, es decir, que se transmita solamente la posesión inmediata, tiene la obligación de devolverlo, entregarlo o darle un uso determinado.

El sujeto activo debe haber entrado en posesión del bien apropiado con la obligación de su posterior devolución o entrega, por lo que respecto del bien hay dos momentos: uno lícito, que es la entrega en posesión legítima del bien y el otro ilícito que es la no devolución, en la que existe el ánimo de apropiarse indebidamente el bien.

Es importante tener presente, conforme lo menciona la ejecutoria superior de la Corte Superior de Arequipa en el Exp. N° 2001-860 que *“para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que el agente realice actos de disposición del bien mueble que le ha sido entregado en posesión, tenencia o uso, con la obligación de devolver, por lo que la falta de estos elementos hacen atípica la conducta y ante la ausencia de tipicidad no existe antijuridicidad ni agente culpable”*. (ROJAS VARGAS, Código penal parte especial. Jurisprudencia, 2006, pág. 156).

Por su parte, la doctrina jurisprudencial contenida en la Casación N° 301-2011-Lambayeque, respecto a la conducta del sujeto activo en el delito de apropiación ilícita, precisa que *“la conducta esencial que debe desarrollar el agente está constituida por la apropiación, es decir, por el apoderamiento o adjudicación a su favor de un bien mueble que no le pertenece legalmente. Esto implica que el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca dentro de la esfera de su patrimonio -bajo su dominio- un bien mueble*

que sabe perfectamente que es ajeno, dado que le pertenece a otro, en su forma clásica, ese otro, es quien por título lícito, le confió el bien por un tiempo y con fin determinado”.

3.5.2. Sujeto pasivo

Es el titular de los bienes muebles, objeto del delito, pudiendo ser cualquier persona física o jurídica. Es decir, el titular de aquel derecho patrimonial o real sobre el cual el sujeto activo debió cumplir con la obligación de devolver el bien, o la persona por cuenta de quien se asumió la obligación de entregar el bien mueble a otro.

Víctima o sujeto del delito de apropiación ilícita será cualquier persona natural o jurídica con la única condición de ser la propietaria del bien mueble, dinero o valor entregado por título legítimo al agente, para después ser devuelto o entregado a una tercera persona o hacer un uso determinado del bien, tal como lo menciona el fundamento 15 de la Casación N° 301-2011, Lambayeque.

3.5.3. Acción típica

El comportamiento consiste en la apropiación de un bien mueble, dinero o un valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado.

Es necesario tener presente en el delito de apropiación ilícita, dos momentos:

- **Primero:** Consistente en la transmisión legítima de la posesión de la cosa por parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, con el título que produzca la OBLIGACIÓN de este último de entregarla o devolverla.
- **Segundo:** La apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo (sujeto activo). Por cuanto no desea entregar ni devolver la cosa.

Asimismo debemos tener en cuenta los elementos constitutivos que conforman el tipo penal de apropiación ilícita como son: la apropiarse indebidamente de un bien mueble, de una suma de dinero o de un valor; que el bien hubiese sido dado en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado y que la apropiación se haga en provecho propio o en beneficio de un tercero.

En el primero de los elementos mencionados el núcleo del tipo está representado por el verbo “apropiar”. Dicho verbo constituye la esencia del delito de apropiación ilícita la que debe recaer respecto a un bien mueble, dinero o un valor, siendo que la jurisprudencia peruana, respecto al bien mueble ha señalado. *“En el delito contenido en el artículo 190° del Código Penal, se considera como bien mueble aquel objeto que importa o refleja un valor económico, es decir cuantificable; pues, al ser éste un delito en que se realiza un apoderamiento del patrimonio del sujeto pasivo a favor del sujeto activo, implica desmedro y un beneficio económico respectivamente”*. En cuanto al dinero, comprende a la moneda corriente. La moneda es un medio de cambio que se acepta generalmente en pago de bienes y servicios y cuando el artículo 190 del Código Penal, se refiere a valor, debemos entender a los objetos de comercio que contienen en sí mismos la expresión de su importe y que representan determinadas sumas o intereses, y además, son materia de contratación en bolsa.

3.6. TIPICIDAD SUBJETIVA

En lo que respecto a la tipicidad subjetiva debemos establecer que evidentemente se requiere de dolo, el sujeto activo ha de conocer y querer la apropiación de un bien mueble ajeno. Además se requiere del elemento subjetivo del tipo, el ánimo de apropiarse, *animus sibi habendi*, que comprende la intención de apoderarse del bien y la de obtener un beneficio o provecho que puede recaer sobre el sujeto activo o un tercero. (PAREDES INFANZÓN, 2016, pág. 275)

Como apropiación son consideradas aquellas acciones a través de las que el autor de cualquier modo fundamente una relación real sobre la cosa ajena, siendo reconocida y probada hacia afuera por acciones exteriores objetivas, la voluntad de apropiación. Son pues, elementos y momentos característicos de la apropiación: 1. La voluntad de ocupar la posesión de propietario. 2. La acción reconocible exteriormente, y 3. La incorporación o disposición patrimonial.

3.7. CONSUMACIÓN

Según Paredes Infanzón citando a Roy Freyre considera “*que hay consumación en el momento en que el sujeto se apropia indebidamente de la cosa que poseía ilícitamente y de manera inmediata*”. (PAREDES INFANZÓN, 2016, pág. 276)

Según Peña Cabrera Freyre citando a Jorge Bernal Caverro, “*El delito de apropiación ilícita es un delito especial que se configura cuando habiendo ingresado un*

bien mueble en la esfera de custodia del agente de una forma lícita –relación obligacional legítima– por decisión de este, apartándose de su rol, convierte la posesión en dominio, vulnerando el título posesorio para el que estaba facultado –entregar, devolver o hacer un uso determinado– por el titular del bien”(PEÑA CABRERA FREYRE A. , 2014, págs. 224-225).

Por su parte, Ramiro Salinas Siccha, *“la conducta delictiva de apropiación ilícita o indebida se configura cuando el agente, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero, se apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que ha recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado del bien”*(SALINAS SICCHA, 2015, pág. 200).

En conclusión, la consumación de esta figura delictiva, presenta la conjunción del *animus lucrandi*, como expresión del aprovechamiento perseguido; y el *animus rem sibi habendi*, como representación de utilizar el bien como suyo (conforme al criterio jurisprudencial, en el delito de apropiación ilícita no basta con la retención del bien, sobre el que pesa la obligación de devolver, sino que dicha conducta debe ser completada con un ánimo subjetivo de querer comportarse como dueño del mismo, ejecutando actos propios de tal, como son la disposición o el uso para fines distintos para los que fuera recibido).

3.8. PENALIDAD

En lo que atañe a la penalidad el artículo 190° del Código Penal, se debe tomar en cuenta que ha establecido hasta tres clases según sea el caso. Así tenemos que para una apropiación ilícita común (primer párrafo) se establece la **pena privativa de libertad no**

menor de dos ni mayor de cuatro años. Para el caso en que el agente actué en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, será la **pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.** Y para el caso de se trate de apropiación de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será **privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.**

CAPITULO II

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Nuestro código penal regula y sanciona aquellos comportamientos delictivos que menoscaban o afectan los denominados bienes jurídicos, entendidos, como aquellos derechos o condiciones que la sociedad a través del Estado ha determinado como fundamentales para la convivencia social, de allí que su protección sea necesaria e indispensable, no solo por otras formas de control social, sino principalmente a través del Derecho Penal.

En ese sentido, nuestra norma penal precisamente estructura su sistemática y regulación en mérito a la protección de bienes jurídicos como la vida el cuerpo y la salud, la libertad sexual, el patrimonio, la administración pública, el orden monetario, etc., y establece a su vez la aplicación de determinados principios que orientan su aplicación, tales como legalidad, subsidiariedad y principalmente el principio de lesividad.

El tema que nos ocupa precisamente se encuentra vinculado a los delitos que atentan contra el patrimonio, siendo que merced a lo prescrito por el artículo 190° del Código Penal, se define la apropiación ilícita como la conducta de quien, “en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un

valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado”.

Nótese además que varios de los delitos involucrados en este título de nuestro código penal, son configurados en su tipo base en mérito a una cuantía de los bienes objeto del delito, de allí que, por ejemplo, se haya regulado el Hurto y los Daños como Faltas y no como delitos, según se puede apreciar del artículo 444° de la norma penal, situación que no ocurre con el caso de la apropiación ilícita. En efecto según este artículo **el que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185° y 205°, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado. La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 189°-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa una remuneración mínima vital.**

Por su parte, es necesario advertir también que los delitos de apropiación ilícita presentan una carga investigativa demasiado extensa, donde al no estar incorporado el valor económico como uno de sus elementos, conlleva a que se formulen denuncias hasta por la apropiación de bienes muebles cuya cuantía no supera siquiera la remuneración mínima vital, tales como un reloj, un celular, una bicicleta, etc., y cuya configuración repercute en investigaciones cuyo propósito no encuentra sustento en el principio de lesividad y protección de bienes jurídicos, restando recursos para la persecución de otros tipos penales en donde resulta de imperiosa necesidad que el Estado, a través del Ministerio Público, deba investigarlos.

El problema que se presenta a continuación, nos lleva a mencionar que hoy en día la sola apropiación de bienes muebles ajenos, implica per se, la configuración del delito de apropiación ilícita, esto conlleva a la necesidad de establecer un valor económico para el bien apropiado indebidamente. Precisamente para ello, se podría tomar en cuenta lo ya previsto para los casos de faltas contra el patrimonio contenidos en el artículo 444° del código penal, pues ahí se deja establecido que será delito, siempre y cuando, el objeto sobre el que recae la acción sobrepase una remuneración mínima vital, lo cual resulta razonable que el legislador incorpore la cuantía del objeto como un elemento en la configuración del delito de apropiación ilícita, generando a su vez la regulación del acto de apropiación ilícita dentro de las faltas contra el patrimonio, junto a las conductas de hurto y daño, en estricta aplicación del Principio de Lesividad y Fragmentariedad o de Mínima Intervención del Derecho Penal.

En tal sentido, en la presente investigación me enfocare en realizar un estudio de la *Incorporación de la Valoración Económica del Objeto como elemento determinante del Delito de Apropiación Ilícita*, el cual permitirá dilucidar y evidenciar algunas características de las instituciones bajo estudio y se orienta principalmente a determinar las implicancias que se darían en caso se incorpore la cuantía del objeto dentro de la configuración típica del delito materia de estudio.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Como ya se ha indicado el sentido de la presente investigación se enfocará en realizar un estudio acerca de la *Incorporación de la Valoración Económica del Objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita* contemplado en el artículo

190° del Código Penal, el cual permitirá dilucidar y evidenciar algunas características de las instituciones bajo estudio y se orienta principalmente a determinar la primacía de los principios de lesividad y fragmentariedad del derecho penal en la regulación de las conductas tipificadas como delitos o falta, planteándonos para ello como interrogante a resolver con la presente investigación lo siguiente: **¿CUÁLES SERÍAN LAS IMPLICANCIAS DE LA INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA?**

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. OBJETIVO GENERAL

⇒ Determinar las implicancias de la incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

⇒ Establecer los alcances del Delito de Apropiación Ilícita el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

⇒ Determinar los alcances del Principio de Lesividad en la regulación del Delito de Apropiación Ilícita.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A través de la presente investigación se busca determinar la incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita, ya que, actualmente se evidencia que en virtud a la regulación de dicho ilícito penal no se considera la cuantía de los objetos materia del delito dentro de su configuración, sino, solo la mera apropiación de los bienes muebles, lo cual deja abierta la posibilidad de que se denuncie e inicien investigaciones absurdas y a su vez que el estado gaste recursos en la persecución de hechos de poco trascendencia penal, debiéndose limitar este tipo de comportamiento a través de la cuantificación de los bienes.

Asimismo, esta situación generaría que el legislador regule la Apropiación Ilícita también como falta disminuyendo la carga investigativa y dirigiendo la labor del Ministerio Público a conductas que verdaderamente afecten bienes jurídicos de mayor trascendencia penal, cuyo grado de lesividad sea adecuado para exigir al estado participación a través de su Iuspuniendi.

La presente investigación, además tiene sustento en la aplicación de los Principios de Lesividad y Fragmentariedad del derecho penal, que se erigen como una garantía frente al poder punitivo del Estado, constituyendo, por lo tanto, un límite ante causas basadas en cuestiones subjetivas o meros caprichos orientados a sancionar comportamientos que no han lesionado gravemente los bienes jurídicos protegidos, para la convivencia social. Así, el Principio de Lesividad es el que dota de contenido material al tipo penal. En virtud de este principio, la pena precisa de la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Sin embargo, no se trata de cualquier acción peligrosa, o lesiva, sino de aquella que cause un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal, caso contrario, ante afectaciones muy leves a este principio corresponde considerar la atipicidad

de la conducta, al carecer de relevancia penal, siendo que, la imposición de una sanción más severa exige siempre la existencia de un plus de lesividad que hace que la conducta realizada se diferencie del tipo básico; mientras que el Principio de Fragmentariedad o de Mínima Intervención, se sustenta en que si bien el derecho penal protege bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico deba ser penalmente protegido, sino aquél que ha sido gravemente lesionado por el comportamiento delictivo; es decir que, éste principio sirve como una pauta para el legislador en aras de que éste pueda concluir si determinados hechos punibles pueden o no transformarse en infracciones; por lo que, no deben castigarse todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino las más graves.

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se orienta dentro de la denominada investigación jurídica formal, tendientes a evaluar y analizar aspectos teóricos, doctrinales y normativos inherentes a la *Incorporación de la Valoración Económica del Objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita* contemplado en el artículo 190° del Código Penal.

4.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que será utilizado en el presente proceso de investigativo es el **DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO**, dado que se propone identificar los elementos y características del problema de la investigación, esperando que por su demostración se llegue a conocimientos de tipo explicativo en la que se exponga con claridad la

importancia de la *Incorporación de la Valoración Económica del Objeto como elemento determinante del Delito de Apropiación Ilícita*.

4.2. TÉCNICA Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La técnica que se implementará en la presente investigación es la **BIBLIOGRÁFICA**, siendo que su implementación servirá para la recopilación de información adecuada al tema en estudio.

Esta investigación teniendo en cuenta la naturaleza del tema, tiene entre los métodos a utilizar los siguientes:

- a) **Método de análisis y de síntesis:** su uso nos permitirá analizar de manera detallada en lo que corresponde a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia que sobre los temas antes mencionados se han previsto en nuestro país, así como en otros estados.
- b) **Métodos de investigación jurídica**
 - **Exegético:** su uso nos permitirá el estudio lineal de las normas de la legislación nacional sobre los temas materias de investigación.
 - **Dogmático:** su uso nos permitirá el estudio de conceptos jurídicos, como instituciones y principios, entre ellos el derecho Penal.
- c) **Métodos de interpretación jurídica**
 - **Literal:** su uso nos permitirá entender al pie de la letra el significado de las normas del ordenamiento jurídico vigente.

- **Sistemático:** su uso nos permitirá comprender una norma conjuntamente con otra del sistema legal, entendiendo al ordenamiento como una unidad.

5. HIPÓTESIS

5.1. HIPÓTESIS GENERAL

LA INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA PRODUCE LA REGULACIÓN DE UN COMPORTAMIENTO A TÍTULO DE FALTA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES INDEBIDAMENTE APROPIADO NO SUPERE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL.

5.2. VARIABLES

Las variables consideradas son:

⇒ **VARIABLE INDEPENDIENTE:**

LA INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA

⇒ **VARIABLE DEPENDIENTE:**

PRODUCE LA REGULACIÓN DE UN COMPORTAMIENTO A TÍTULO DE FALTA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES

MUEBLES INDEBIDAMENTE APROPIADO NO SUPERE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL.

5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES

⇒ **VARIABLE INDEPENDIENTE:** La incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita

La **valoración económica del objeto**, consiste en la cuantía o significación económica que el mismo posee en el mercado, lo cual lo hace merecedor de protección jurídico penal, debiendo su cuantía ser superior la remuneración mínima vital efectos de ser considerado como elemento para la configuración del delito de apropiación ilícita, siendo que bajo el imperio del principio de lesividad los bienes cuyo valor sea menor no serían reprochables penalmente a través de la configuración de un ilícito penal.

El **delito de Apropiación Ilícita**, es la conducta de quien, “en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado”.

⇒ **VARIABLE DEPENDIENTE:** Produce la regulación de un comportamiento a título de falta cuando el valor de los bienes muebles indebidamente apropiado no supere la remuneración mínima vital.

Una falta, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.

Los Bienes Muebles son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza extraña y manteniendo su integridad

La remuneración mínima vital, tiene su origen en el artículo 24° de nuestra Const.P.P. establece el derecho fundamental de todo trabajador a una remuneración justa y equitativa que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. En este sentido, la RMV es considerada como el umbral mínimo de ingresos que debe percibir un trabajador que labora una jornada completa de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. El parámetro también se utiliza para determinar la subvención mínima que deben percibir aquellas personas que realizan modalidades formativas laborales en una jornada completa.

5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

| VARIABLES | TIPO DE VARIABLES | DEFINICIÓN | INDICADORES | FUENTE |
|---|-------------------|--|--|--|
| La incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de | Independiente | La valoración económica del objeto, consiste en la cuantía o significación económica que el mismo posee en el mercado, lo cual lo hace merecedor de protección jurídico penal, debiendo su cuantía ser superior la remuneración mínima vital efectos de ser considerado como elemento para la configuración del delito de apropiación ilícita, siendo que bajo el imperio del principio de lesividad | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valoración económica. ▪ Delito ▪ Apropiación ilícita | La Doctrina. La Legislación. La Jurisprudencia. Derecho comparado |

| | | | | |
|--|-------------|---|---|---|
| apropiación ilícita | | <p>los bienes cuyo valor sea menor no serían reprochables penalmente a través de la configuración de un ilícito penal.</p> <p>El delito de Apropiación Ilícita, es la conducta de quien, “en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado”.</p> | | |
| Produce la regulación de un comportamiento a título de falta cuando el valor de los bienes muebles indebidamente apropiado no supere la remuneración mínima vital. | Dependiente | <p>Una falta, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.</p> <p>Los Bienes Muebles son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza extraña y manteniendo su integridad</p> <p>La remuneración mínima vital, tiene su origen en el artículo 24° de nuestra Const.P.P., establece el derecho fundamental de todo trabajador a una remuneración justa y equitativa que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. En este sentido, la RMV es considerada como el umbral mínimo de ingresos que debe percibir un trabajador que labora una jornada completa de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. El parámetro también se utiliza para determinar la subvención mínima que deben percibir aquellas personas que realizan modalidades formativas laborales en una jornada completa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta ▪ Valor ▪ Bienes muebles ▪ Remuneración mínima vital | <p>La Doctrina. La Legislación. La Jurisprudencia. Derecho comparado.</p> |

Fuente: elaboración propia

CAPITULO III

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

1. **PROBANZA JURÍDICO-DOCTRINAL**

En el anteproyecto de tesis, se planteó como hipótesis de la investigación que:

“LA INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL OBJETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA PRODUCE LA REGULACIÓN DE UN COMPORTAMIENTO A TITULO DE FALTA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES INDEBIDAMENTE APROPIADO NO SUPERE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL”.

La hipótesis planteada haya sustento en la necesidad de establecer una cuantificación mínima para los bienes muebles apropiados indebidamente, ya que, al no estar delimitada una cuantía de los mismos cualquier apropiación por irrisoria o infirma que sea podría ser pasible de investigación penal, lo que generaría una acumulación de investigación en el Ministerio Publico que restan tiempo a investigación quizás más complejas y, porque no decirlo, más importantes.

Pues bien conforme se ha señalado en el la presente investigación el derecho penal no solo constituye el marco jurídico penal diseñado por el legislador, sino también el ámbito doctrinario que orienta su aplicación y frente al cual emergen los llamados principios del derecho penal, los cuales son las bases que sustentan el sistema de punición

estatal, de allí que debamos recordar que el derecho penal dentro de los sistemas de control formal sea la última ratio y que dentro del mismo no todas las conductas son merecedoras de sanción penal a título de delito sino también en grado de falta.

De lo mencionado cobra pues importancia los *principios de subsidiariedad y fragmentariedad* los cuales constituyen vertientes del **Principio de Mínima Intervención**, en atención al cual *Estado solo puede aplicar la pena cuando resulte útil y necesario para mantener el orden democrático y social y en general para conservar la convivencia social, en tanto otras formas de control son insuficientes*, pues no todo comportamiento que afecte un bien jurídico debe ser merecedor de sanción penal entendida como “pena”, sino también de otras formas de sanción penal cuando la intensidad de la afectación del bien jurídico sea mínima.

Existen muchos bienes muebles que presenta un valor económico en el mercado muy por debajo de la remuneración mínima vital por ejemplo licuadoras, ollas arroceras, planchas, etc., que deberían ser perseguidos mediante el proceso por faltas, pues se debe recordar que el bien jurídico que protege el delito de apropiación ilícita es el “patrimonio” que para nuestro sistema nacional es entendido desde una posición mixta, por lo que el objeto material de un delito contra el patrimonio, como sería el caso del delito de apropiación ilícita solo puede serlo un bien con valor económico, por lo que para ser sujeto pasivo de un delito patrimonial no basta con que el sujeto tenga una relación meramente fáctica con la cosa, sino que es preciso que esté relacionado con ella en virtud de una relación protegida por el ordenamiento jurídico y por otro lado el perjuicio patrimonial hay que entenderlo como toda disminución, económicamente valuable, del acervo patrimonial que, jurídicamente, corresponde a una persona.

Del mismo modo cuando hablamos del principio de mínima intervención debemos tener en consideración la jurisprudencia nacional la misma que expresa “*el principio de Mínima Intervención del derecho penal es compatible con la del Estado Social, rechazándose la idea de un Estado represivo como protector de los intereses de las personas; ello enlazaría con la tradición liberal que arranca Beccaria y que postula la humanización del Derecho Penal: se parte de la idea de que la intervención penal supone una intromisión del estado en la esfera de libertad del ciudadano, que sólo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria -inevitable- para la protección del mismo ciudadano*”.

Además de ello cabe recordar que otros tipos penales que protegen también el bien jurídico patrimonio, que no solo abarca los bienes muebles, sino incluso los inmuebles exige para su configuración una cuantía mínima de afectación caso contrario no estaríamos hablando de un comportamiento típico “Delito”, sino de una “Falta” contra el patrimonio conforme sucede con el hurto y los daños recogidos en el artículo 444° de nuestro CP, lo cual puede ocurrir perfectamente con el delito que venimos estudiando. Por ello, no se debe olvidar que el Derecho Penal sólo debe intervenir en aquellos casos donde los ataques revisten gravedad para los bienes jurídicos de mayor trascendencia y no en los cuales se tiene un nivel menor de afectación correspondiéndole una reacción penal más débil estableciéndose parámetros económicos para poder determinar la comisión de un delito o faltas.

Asimismo, nuestra postura tiene fundamento además en el *Principio de subsidiaridad*, por el cual el derecho penal al ser la “*última ratio o extrema ratio*” sólo debe recurrirse a él cuando han fallado todos los demás controles sociales. Así también lo

crea la jurisprudencia: *“con relación a la función que el Derecho Penal desarrolla a través de sus sanciones, ha de afirmarse su carácter subsidiario o secundario, pues la afirmación de que el Derecho Penal constituye la última ratio entre los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la supervivencia de la sociedad, debería implicar, como lógica consecuencia, que el Derecho Penal está subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos gravosos para el individuo de que dispone el Estado; en este sentido, es difícil pensar en la existencia de un bien jurídico que sólo sea defendible por el Derecho Penal”*.

Finalmente, desde la óptica del *“Principio de fragmentariedad”* al derecho penal **no se le puede utilizar para prohibir todas las conductas**, pues el mismo solo debe castigar aquellas conductas lesivas de bienes jurídicos que revisten mayor gravedad, pues los fundamentos de su aplicación radican necesariamente en primer lugar, defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos ataques que impliquen una especial gravedad, exigiendo además, determinadas circunstancias y elementos subjetivos. En segundo, tipificando sólo una parte de lo que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico. Por último, dejando, en principio, sin castigo las acciones meramente inmorales.

Por lo dicho anteriormente resulta válido afirmar que la consecuencia de la cuantificación de los bienes muebles pasibles de protección de la apropiación ilícita, basando la misma en la remuneración mínima vital trae como consecuencia la generación de un comportamiento a título de falta contra el patrimonio, por lo que los agraviados deberían hacer valer su derecho ante los Juzgados de Paz, a través del ejercicio de la acción penal privada, al mismo tiempo producirá es necesario la modificación del artículo 444°

del C.P., a efectos de que se incluya dentro de las faltas contra el patrimonio a la Apropriación Ilícita conjuntamente con el Hurto y los Daños.

2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Desde el punto de vista jurisprudencial tenemos la Casación N° 301-2011-Lambayeque, la misma que constituye doctrina jurisprudencial vinculante en sus acápites 8.1 a 8.6 del considerando octavo de dicha ejecutoria, la misma que está referida a la protección jurídica de los bienes jurídicos del delito de apropiación ilícita y que además ha fijado aspectos importantes de su configuración.

Dicha jurisprudencia precisa que *“la conducta esencial que debe desarrollar el agente está constituida por la apropiación, es decir, por el apoderamiento o adjudicación a su favor de un bien mueble que no le pertenece legalmente. Esto implica que el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca dentro de la esfera de su patrimonio -bajo su dominio- un bien mueble que sabe perfectamente que es ajeno, dado que le pertenece a otro, en su forma clásica, ese otro, es quien por título lícito, le confió el bien por un tiempo y con fin determinado”*.

Sin embargo, lo que no ha mencionado dicha ejecutoria son los aspectos vinculados con la cuantía de los bienes materia del delito de apropiación ilícita lo que a nuestro entender deberían ser analizados concretamente a fin de evitar que cualquier apropiación caigan dentro de los supuestos típicos de la apropiación ilícita.

Asimismo, la regulación actual del delito analizado permite que la apropiación indebida de cualquier bien mueble pueda ser merecedor de investigación penal, generando que la escasa cuantía de los mismos distraiga la atención que debería merecer hechos delictivos de mayor gravedad, generando además pérdidas de horas hombre y recursos en situación que podrían ser perseguidos por los agraviados a través de procesos de acciones privadas antes los órganos jurisdiccionales.

La situación descrita evidencia el poco interés tanto del legislador como de los órganos jurisdiccionales de redefinir correctamente el ámbito de aplicación y configuración del delito de apropiación ilícita no solo desde la óptica del principio de legalidad, sino también de los principios de mínima intervención, fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal, puesto que el análisis del delito se enfoca desde otra perspectiva tal como por ejemplo ocurre con la Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuya Primera Sala Penal de Reos Libres en el Exp. N° 4131-2004 solo menciona que *“El tipo penal de apropiación ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a un bien mueble, que previamente había recibido el procesado por parte del sujeto pasivo; significando que la exigencia de entrega, devolución o uso determinado surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo probatorio debe girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia de apropiación y el agente”* (ROJAS VARGAS, 2013, pág. 445), pero tampoco se esfuerza por establecer la cuantía como un elemento de importante análisis.

3. ANÁLISIS EN EL DERECHO COMPARADO

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Analizando el derecho comparado, se ha creído conveniente traer a colación una de las principales legislación que nuestros legisladores siempre han tenido en cuenta respecto a la protección penal del patrimonio, la cual es la legislación española, la que además resulta importante también para esta investigación.

En España el artículo 249° del Código Penal establece que *“los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. **Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.**”*, es decir que en materia de regulación de delitos contra el patrimonio en general la norma española ha establecido una cuantía para la sanción lo que abarca también el delito que nos ocupa como es la apropiación indebida y que tipifica en el artículo 253° de la norma penal en los siguientes términos:

Artículo 253.

Serán castigados con las penas del artículo 249 ó, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Si la cuantía de lo apropiado no excediere de cuatrocientos euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Es de resaltar la importancia del aporte de la legislación española toda vez que la misma ciñe el marco sancionador de la conducta no solo a los elementos configurativos del tipo penal, sino también a la valoración de los bienes materia de apropiación, lo que tiene correlato también con nuestra propuesta, puesto que consideramos necesarios definir un margen cuantitativos de los bienes materia de apropiación.

4. CONTRASTACIÓN O DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Del análisis jurídico doctrinario, jurisprudencial y de derecho comparado realizado en el presente trabajo de investigación, se ha llegado a concluir que resulta necesaria la incorporación de la valoración económica del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita común, a mérito de que todas aquellas apropiaciones voluntarias de bienes muebles de ínfimo o escaso valor puedan ser consideradas como faltas y no como delitos contra el patrimonio, en razón a su irrisorio valor, proponiéndose que ése valor económico escale hasta el monto de una Remuneración Mínima Vital (RMV) y posterior a ello recién poder ser calificado como delito, como ocurre en el caso de las faltas contra el patrimonio contenidas en el artículo 444° del código penal, pues ahí se deja establecido que será delito, siempre y cuando, el objeto sobre el que recae la acción sobrepase una remuneración mínima vital, lo cual resulta razonable que el legislador incorpore la cuantía del objeto como un elemento en la configuración del delito de apropiación ilícita, generando a su vez la regulación del acto de apropiación ilícita dentro de las faltas contra el patrimonio, junto a las conductas de hurto y

daño; esto en estricta aplicación del Principio de Lesividad y Fragmentariedad o de Mínima Intervención del Derecho Penal, según los cuales el delito precisa la puesta en peligro o lesión de bienes jurídicos, pero no de todos, sino de aquéllos que tengan mayor relevancia o que los lesiones gravemente, justificándose la intervención del derecho punitivo en pro de la correcta convivencia social y el mantenimiento del orden público, lo que implicaría en consecuencia la disminución de la carga investigativa, dirigiendo la labor del Ministerio Público a conductas que verdaderamente afecten bienes jurídicos de mayor trascendencia penal y no de aquéllas que no vulneran gravemente el ordenamiento jurídico penal; así como otorgarle una alternativa de solución al justiciable optando por acudir a los Juzgados de Paz Letrados, en el cauce de un Proceso por Faltas, que en suma son mucho más célere.

CONCLUSIONES

1. Que, es necesaria la incorporación del valor económico del objeto del delito de Apropiación Ilícita, a fin de discriminar aquéllas retenciones voluntarias de bienes muebles ajenos que por su escaso valor deben ser consideradas una Falta contra el Patrimonio y no un delito, pudiendo ser dicho límite el valor de una Remuneración Mínima Vital (RMV), para la configuración de dicho ilícito punible, acorde con los Principios de Lesividad y Fragmentariedad del Derecho Penal, lo que corrobora evidentemente nuestra hipótesis e investigación realizada

Debe resaltarse el aporte de la legislación española que ciñe el marco sancionador de la conducta de la Apropiación Indebida, no sólo a los elementos configurativos del tipo penal, sino también a la valoración de los bienes materia de apropiación, lo que tiene correlato también con nuestra propuesta, puesto que consideramos necesarios definir un margen cuantitativos de los bienes materia de apropiación.

2. Actualmente en la descripción típica del delito de Apropiación Ilícita, no se considera la cuantía de los objetos materia del delito dentro de su configuración, sino, solo la mera apropiación de los bienes muebles, lo cual deja abierta la posibilidad de que se denuncie e inicien investigaciones absurdas y a su vez que el estado gaste recursos en la persecución de hechos de poco trascendencia penal, debiéndose limitar este tipo de comportamiento a través de la cuantificación de los bienes, por lo que, al no establecerse un monto económico límite para la configuración del delito de Apropiación Ilícita, repercute en investigaciones cuyo propósito no encuentra sustento en el Principio de Lesividad y protección de bienes

jurídicos, restando recursos para la persecución de otros tipos penales en donde resulta de imperiosa necesidad que el Estado, a través del Ministerio Público, deba investigarlos.

3. Como podemos apreciar el ordenamiento punitivo nacional, respecto a la protección del bien jurídico patrimonio contempla una configuración a título de falta, pero solo la limita a los tipos penales relacionados con el hurto y los daños, más no así con la apropiación ilícita, por lo que a la luz del ordenamiento jurídico cualquier apropiación indebida de bienes muebles sin importar la cuantía de los mismos puede ser perseguido como delito, generando gastos al Estado en la persecución de hechos que no han lesionado gravemente el bien jurídico patrimonio.

Se podría tomar en cuenta lo ya previsto para los casos de faltas contra el patrimonio contenidos en el artículo 444° del código penal, pues ahí se deja establecido que será delito, siempre y cuando, el objeto sobre el que recae la acción sobrepase una remuneración mínima vital, lo cual resulta razonable que el legislador incorpore la cuantía del objeto como un elemento en la configuración del delito de apropiación ilícita, generando a su vez la regulación del acto de apropiación ilícita dentro de las faltas contra el patrimonio, junto a las conductas de hurto y daño, en estricta aplicación del Principio de Lesividad y Fragmentariedad o de Mínima Intervención del Derecho Penal.

La regulación del delito de Apropiación Ilícita como falta disminuiría la carga investigativa, dirigiendo la labor del Ministerio Público a conductas que verdaderamente afecten bienes jurídicos de mayor trascendencia penal, cuyo grado

de lesividad sea adecuado para exigir al estado participación a través de su Iuspuniendi, como manifestación del objetivo de tutela de la norma penal.

4. Que, los Principios de Lesividad y Fragmentariedad del derecho penal, se erigen como una garantía frente al poder punitivo del Estado, constituyendo, por lo tanto, un límite ante causas basadas en cuestiones subjetivas o meros caprichos orientados a sancionar comportamientos que no han lesionado gravemente los bienes jurídicos protegidos, como lo es en el presente caso, el bien jurídico Patrimonio, que ante la falta de incorporación del valor económico del objeto del delito de Apropiación Ilícita, su configuración engloba a la retención de cualquier bien mueble de escaso valor, que en consecuencia conllevaría al inminente ejercicio de la acción penal.

No se debe olvidar que el Derecho Penal sólo debe intervenir en aquellos casos donde los ataques revisten gravedad para los bienes jurídicos de mayor trascendencia y no en los cuales se tiene un nivel menor de afectación correspondiéndole una reacción penal más débil estableciéndose parámetros económicos para poder determinar la comisión de un delito o faltas.

5. La valoración económica del objeto, consiste en la cuantía o significación económica que el mismo posee en el mercado, lo cual lo hace merecedor de protección jurídico penal, debiendo su cuantía ser superior la remuneración mínima vital efectos de ser considerado como elemento para la configuración del delito de apropiación ilícita, siendo que bajo el imperio del principio de lesividad los bienes cuyo valor sea menor no serían reprochables penalmente a través de la configuración de un ilícito penal.

La cuantificación de los bienes muebles pasibles de protección de la apropiación ilícita, basando la misma en la remuneración mínima vital traería como consecuencia la generación de un comportamiento a título de falta contra el patrimonio, por lo que los agraviado debería hacer valer su derecho ante los Juzgados de Paz a través del ejercicio de la acción penal privada, al mismo tiempo producirá es necesario la modificación del artículo 444° del CP a efectos de que se incluya dentro de las faltas contra el patrimonio a la apropiación ilícita conjuntamente con el hurto y los daños.

RECOMENDACIONES Y APORTES

1. Que, se incorpore el valor económico del objeto como elemento determinante del delito de apropiación ilícita, a efectos de descrinar las apropiaciones de bienes muebles por la cuantía de su valor considerándolos como faltas o delitos, según corresponda.
2. Que, el límite económico referencial de dicha cuantía para considerar a los bienes muebles apropiados de escaso valor como una falta contra el patrimonio, sea una remuneración mínima vital, como sucede para el caso de los delitos de Hurto Simple y Daños Materiales, esto en estricta aplicación del Principio de Lesividad y Fragmentariedad o de Mínima Intervención del Derecho Penal.
3. Que, con la incorporación del delito de apropiación ilícita común se genere una solución alternativa al justiciable a efectos de recurrir a vías igualmente satisfactorias de su derecho, pero menos lesivas ante la vulneración de bienes muebles cuyo valor patrimonial es ínfimo y no ha lesionado gravemente al derecho penal.
4. Que, el presente trabajo de investigación sirva como un precedente a futuras investigaciones interesadas en el presente tema o afines, donde inclusive podría plantearse que el monto límite económico para diferenciarlo de delitos y faltas sea superior a una remuneración mínima vital en concordancia con los avances económicos de cada realidad, siempre que sea razonable.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, J. H. (julio de 2015). Título preliminar. Principios generales (Comentarios al nuevo código penal). *Actualidad Penal*, 13(2), 40-81.
- ATACHAHUA ALIANO, A. J. (2017). *El patrimonio autónomo: ¿Una parte material o procesal*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 3 de marzo de 2018, de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9443/Atachahua_Aliano_Patrimonio_aut%C3%B3nomo_parte1.pdf?sequence=1
- BACA CABRERA, R. V. (s.f.). *Jurisprudencia penal. Procesos sumarios*. Gaceta Jurídica.
- BELLIDO CUTIZACA, E. (28 de agosto de 2012). *Instituto de Investigaciones Jurídicas RAMBELL de Arequipa - Perú*. Recuperado el 13 de enero de 2018, de Instituto de Investigaciones Jurídicas RAMBELL de Arequipa - Perú: <http://institutorambell.blogspot.com/2012/08/los-principios-del-derecho-penal.html>
- BRAMONT-ARIAS, L. A. (2004). *Derecho penal peruano. Parte general*. Lima: Ediciones Jurídicas UNIFE.
- CABANELLAS DE TORRES, G. (2006). *Diccionario jurídico elemental*. Heliasta.
- CORNEJO, Á. G. (2015). *Derecho Penal Elemental: Parte General*. Lima: Pacífico.
- GARCÍA CAVERO, P. (2003). *Derecho económico. Parte general*. Lima: OSBAC.
- JESHECK, H. H. (1978). *Tratado de Derecho Penal*. (S. MIR PUIG, Trad.) Barcelona: Bosch.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (s.f.). Recuperado el 16 de enero de 2018, de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/Teoria-Del-Delito.pdf>
- MUÑOZ CONDE, F., & GARCÍA ARAN, M. (s.f.).

- MUÑOZ CONDE, F., & GARCIA ARAN, M. (2004). *Derecho Penal. Parte General* (Sexta ed.). Valencia, España: Tirant to Blach.
- PAREDES INFANZON, J. (2013). El bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio. En J. PAREDES, C. PINEDO, E. ORE, A. PEÑA, J. BALCÁZAR, J. TELLO, & C. BRAVO, *Robo y Hurto* (págs. 9-18). Lima: El Búho E.I.R.L.
- PAREDES INFANZÓN, J. (2016). *Delitos contra el patrimonio. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial* (Tercera ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. (setiembre de 2014). La subsunción típica al delito de apropiación ilícita, la ilícita actuación del comisionista. *Actualidad Penal*, 3, 224-225.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (septiembre de 2014). La subsunción típica al delito de apropiación ilícita, la ilícita actuación del comisionista. *Actualidad Penal*, III(1), 222-235.
- PEÑA CABRERA, R. (1995). *Tratado de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra el patrimonio* (Vols. II-A). Lima: Ediciones Jurídicas.
- ROJAS VARGAS, F. (2006). *Código penal parte especial. Jurisprudencia* (Primera ed., Vol. III). Lima: RZ editores.
- ROJAS VARGAS, F. (2013). *Los delitos contra el patrimonio en la jurisprudencia* (Primera ed.). Lima: El Buho E.I.R.L.
- ROY FREIRE, L. (1998). *Una visión moderna de la teoría del delito*. (M. d. Justicia, Ed.) Lima, Perú.
- SALINAS SICCHA, R. (2015). *Delitos contra el patrimonio* (Quinta ed.). Lima: Instituto Pacífico.

- SCHALACK MUÑOZ, A. (2008). El concepto de patrimonio y su contenido en el Delito de Estafa. *Revista Chilena de Derecho*, 35(2), 261-292. Recuperado el 19 de Enero de 2018, de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v35n2/art03.pdf>
- SOLARTE RODRÍGUEZ, A. (2004). Los actos ilícitos en el derecho romano. *Vniversitas*(107), 692-746. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/825/82510718.pdf>
- VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2004). Límites a la función punitiva estatal. *Derecho y Sociedad*(21), 93-116.

ANEXOS



Firma
Digital

Firmado digitalmente por DELGADO
MANRIQUE Elena Carolina FAU
20131370301 eoh
Presidente De La Junta De Fscale's
Superiores Del OJ Si
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 30.05.2018 09:30:51 -05:00

Sullana, 30 de Mayo del 2018

CARTA N° 000001-2018-MP-FN-PJFSSU

Sr.

DEYVIS JIMÉNEZ NIEVES

Calle Grau N° 546 - Sullana

Presente.-

Asunto : Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted saludándolo muy cordialmente, y en relación al asunto del rubro, dar respuesta a su escrito presentado con fecha 23 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita se le informe cuántas denuncias se han recibido en el Distrito Fiscal de Sullana, por el delito de Apropiación Ilícita durante el año fiscal 2017, así como que se le informe cuántas de éstas han prosperado llegando hasta la Etapa de Juzgamiento, o cuántas se encuentran en la Etapa de Formalización y/o Acusación.

En atención a ello, teniendo en cuenta que nuestra Entidad se encuentra comprendida dentro de la Entidades de la Administración Pública comprendidas en el Artículo 2° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de conformidad a lo establecido en el artículo 10° de la acotada Ley; y, teniendo en cuenta además que la información requerida, no se encuentra incurso dentro de las excepciones al ejercicio de acceso a la información pública que contempla el artículo 15° de la referida Ley; se le remite el Informe Administrativo N° 054-2018-MP-FN-EA-AGI-SULLANA, emitido por el Ing. Eduardo Arancibia Córdova, Analista del Área de Indicadores del Distrito Fiscal de Sullana, mediante el cual el referido ingeniero remite a esta Oficina de Presidencia el Reporte del Delito por "Apropiación Ilícita" del año 2017, el mismo que contiene la información requerida.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi deferente consideración.

Atentamente,

Adjunto: Informe Administrativo N° 054-2018-MP-FN-EA-AGI-SULLANA.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado en el MPFN. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas.
CARTA N° 000001-2018-PJFSSU Página 1 de 1

(073) 501881
Anexo: 5413
Psje. Maria Auxiliadora N° 102 – Urb. Santa Rosa - Sullana
Correo electrónico: presidencia.sullana.mpfm@gmail.com

1107 - 2018



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN



Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE SULLANA
ÁREA DE GESTIÓN DE INDICADORES

Hora: 11:16 a. Firma: Sullana 28 de Mayo de 2018
RECIBIDO
SIN VERIFICAR CONTENIDO

INFORME ADMINISTRATIVO N° 054-2018-MP-FN-EA-AGI-SULLANA

A : **Dra. Elena Carolina Delgado Manrique**
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Sullana

DE : **Ing. Eduardo Humberto Arancibia Córdova**
Analista del Área de Gestión de Indicadores del Distrito Fiscal de Sullana

ASUNTO : Reportes a Solicitud del Sr. Deyvis Jiménez Nieves

REF. : Solicitud Presentada a Presidencia.

Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de responder a la solicitud presentada a presidencia, los datos solicitados detallando lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado se adjunta el Reporte de delito por "Apropiación Ilícita del año 2017" arrojando un total de **638 casos** distribuidos de la siguiente manera por el solicitante; en la etapa de Denuncia Concluida, con sentencia **41 casos**, en etapa con Control de Plazos, formaliza investigación preparatoria **17 casos**, y en etapa sede judicial, con Acusación **33 casos** siendo la suma total **91 casos** en base a lo solicitado a presidencia.

Es todo lo que tengo que informar a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Eduardo Arancibia Córdova
ANALISTA
ÁREA DE INDICADORES
Distrito Fiscal de Sullana

Adj.:
Reporte de Delitos Apropiación Ilícita.

(073) 50-1881 (073)31-2540
Anexos: 5413
Pasaje María Auxiliadora S/N - Sullana - Perú
www.mpfn.gob.pe

DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA

| | |
|--|------------|
| TOTAL DE CASOS DE APROPIACIÓN ILÍCITA | 638 |
|--|------------|

| DELITO SOLICITADO | N° DE CASOS |
|--|--------------------|
| A.I. (APROPIACION DE PRENDA) | 1 |
| A.I. (APROPIACION ILICITA COMUN) | 207 |
| A.I. (APROPIACION IRREGULAR BIEN AJENO CUYA TENENCIA SEA CONSECUENCIA DE ERROR, CASO FORTUITO O M... | 1 |
| APROPIACION ILICITA | 213 |
| APROPIACION ILICITA (BIEN.TESORO.PERD.) | 3 |
| APROPIACION ILICITA (HURTO IMPROPIO) | 14 |
| APROPIACION ILICITA (VENT.APROP.PRENDA) | 1 |
| APROPIACION ILICITA(BIEN.MUEB.SUM.DINER) | 198 |
| TOTAL | 638 |

FUENTE: SGF-SULLANA

AGI-SULLANA

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA

| DELITO | ETAPA | ESTADOS | N° CASOS |
|------------------------|--------------------------|--|----------|
| APROPIACIÓN ILÍCITA | ETAPA DENUNCIA CONCLUIDA | CON SENTENCIA | 41 |
| | ETAPA CONTROL DE PLAZOS | FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA | 17 |
| | ETAPA SEDE JUDICIAL | CON ACUSACION | 33 |
| TOTAL | | | 91 |

FUENTE: SGF-SULLANA

AGI-SULLANA

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

-SENTENCIA DE CASACIÓN-

Lima, cuatro de octubre de dos mil doce.-

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lambayeque, con los recaudos que se adjuntan al principal; decisión que se adopta bajo la ponencia del señor Juez Supremo Salas Arenas.

1. DECISIÓN CUESTIONADA.-

La sentencia de vista de veintitrés de agosto de dos mil once, emitida por la Primera Sala Penal Superior de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, obrante en los folios sesenta y dos a sesenta y siete del cuaderno acompañado, que revocó la sentencia emitida por el señor Juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que condenó a doña Jalli Jannan Villarreal López como autora del delito de apropiación ilícita, en agravio de la empresa Rinti Sociedad Anónima y reformándola, la absolvió de los cargos formulados en su contra.

2. FUNDAMENTOS DE LA CASACIÓN.-

La recurrente solicita que la Instancia Suprema declare nula la sentencia de vista cuestionada y en sede de instancia proceda a condenar a la procesada como autora del delito imputado y se establezca doctrina jurisprudencial al respecto; sustentando su planteamiento en las siguientes consideraciones:

2.1 La decisión efectuó una errónea interpretación de la norma penal contenida en el artículo ciento noventa del Código Penal que regula el delito de apropiación ilícita.

2.2 Que la reacción penal debe ser la sanción de aquellos comportamientos tendientes a menoscabar intereses jurídicos protegidos, como el caso concreto en que el agente aprovechándose de la condición especial conferida por una persona

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

determinada se aprovecha de la misma, luego de realizar cobros en su nombre, no colocando o entregando el bien fungible dentro de la esfera de disponibilidad del titular, apropiándose de lo cobrado.

2.3 Los argumentos esbozados en la sentencia de vista cuestionada contradicen los desarrollos dogmáticos efectuados respecto a la configuración del delito de apropiación ilícita, por lo que se debe establecer un criterio en salvaguarda de los derechos de los justiciables y del irrestricto derecho de propiedad, de aquel que si bien no entrega materialmente la cosa, es el que concede la condición especial al agente.

2.4 La imputación criminal referida a la apropiación por parte de la procesada de la suma de quince mil setenta y un nuevos soles con nueve céntimos producto del cobro a varios clientes de la empresa agraviada que no fueron reportados, configura el delito de apropiación ilícita por cuanto la encausada haciendo uso de las facultades o condición especial conferida, recibió dinero, firmando las respectivas facturas, y no obstante que la citada entrega de dinero generaba la obligación de darle un destino final a los bienes fungibles, dispuso de los mismos, cuando su condición no le permitía tal conducta.

2.5 No resulta adecuado afirmar que el sujeto pasivo del delito sea siempre la persona que entrega el bien mueble ya que en muchas ocasiones dicho acto no se condice con el nacimiento de la condición especial en el agente, la misma que es conferida por el sujeto como titular del derecho de propiedad afectado, con el acto de apoderamiento perpetrado.

2.6 Finalmente sostiene que: "[l]os magistrados de la Sala Penal indican que cuando los clientes cancelaron el dinero, no lo hicieron con la intención de que la imputada entregara el dinero a su

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

principal, porque para ellos se efectuó a la empresa misma, por lo que no habría apropiación ilícita, debido a que los entregantes del dinero lo hicieron a la empresa, ello determinaría en todo caso, que la transferencia de dinero efectuada a la imputada fue realmente realizada a la empresa misma, lo que, en un supuesto negado (ya aceptando la incorrecta tesis propuesta por el tribunal superior) supondría un acto, sino de apoderamiento, de sustracción del dinero por parte de la imputada, asumiendo la ficción jurídica que el dinero ya se encontraba en disponibilidad de la empresa (en atención al estado de dependencia de la empleada y conforme lo plantea la Sala Penal de Apelaciones), por lo que el acto de apoderamiento del dinero por parte de la imputada importaría (también por ficción jurídica) un acto de sustracción, configurando, por inferencia de dichas afirmaciones de la Sala Penal, el delito de hurto; lo que implicaría (para no dejar impune el hecho) que en todo caso se debió proceder conforme a las facultades conferidas por el inciso uno del artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal en concordancia con el contenido del inciso uno del artículo trescientos setenta y cuatro del mismo texto adjetivo y haber sugerido una nueva calificación jurídica, para poder aplicar la excepción contenida en el inciso dos del artículo trescientos noventa y siete del ya acotado Código Procesal, ya que el no hacerlo viene generando impunidad e indefensión" (sic).

3. ITER PROCESAL.-

3.1 El recurso de casación fue calificado por el Colegiado Supremo mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil once (folios trece a quince del cuaderno de casación), declarándose bien concedido el recurso por la causa de errónea interpretación de la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

norma penal, a fin de establecer doctrina jurisprudencial respecto a si para subsumir o no una conducta dentro de los alcances del delito previsto en el artículo ciento noventa del Código Penal, se ha de tener en cuenta el aspecto objetivo del delito de apropiación ilícita, la relación existente entre sujeto activo, sujeto pasivo y justo título – *condición cualificante del agente*- y su aplicación al caso en concreto.

3.2 Cumpliéndose con lo estipulado por el artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal, se llevó a cabo la audiencia de casación escuchándose los alegatos de la Fiscalía Suprema en lo Penal; deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corresponde dictar resolución de fondo, que se leerá el día catorce de noviembre de dos mil doce.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SUSTENTO NORMATIVO.-

1.1 El numeral tres del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal establece como causa para interponer el recurso de casación cuando la sentencia importa una errónea interpretación de la Ley Penal.

1.2 El inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal estipula que la Corte Suprema discrecionalmente establecerá doctrina jurisprudencial.

1.3 El artículo cuatrocientos treinta y tres del citado Código regula el contenido de la sentencia de casación y sus efectos.

1.4 El primer párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal sanciona la conducta del que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

1.5 La Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad número mil doscientos noventa y seis guión dos mil diez, Lambayeque, tramitó el delito de apropiación ilícita teniendo como *factum* que los trabajadores de un grifo se apropiaron ilícitamente de los ingresos de las ventas diarias de combustible no reportado.

1.6 La Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de queja número veinte guión dos mil ocho guión Lima de veintitrés de marzo de dos mil nueve vinculada con Ejecutoria Suprema expedida en el recurso de nulidad número mil cuarenta y nueve guión dos mil ocho de diez de marzo de dos mil nueve, estableció la configuración del tipo de apropiación ilícita por la indebida apropiación efectuada por el encausado de libros contables de la empresa agraviada.

SEGUNDO: SÍNTESIS DEL FACTUM.-

Se aprecia del requerimiento fiscal obrante en los folios uno a nueve que se imputa a la encausada doña Jalli Jannan Villareal López que en su condición de empleada de la empresa agraviada, Rinti S.A., - *vendedora de productos alimenticios para caninos y felinos*- se apropió indebidamente del dinero que cobró a clientes de ésta empresa, ascendente a quince mil setenta y un nuevos soles con nueve céntimos (S/. 15, 071.09). Así, la imputada entregó a clientes de la empresa comprobantes de pago en señal de acuse de recibo del dinero por los productos vendidos sujetos a crédito, pero una vez efectuado el pago por estos a ella, no lo entregó las arcas de la referida empresa.

TERCERO: DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN.-

3.1 La sentencia cuestionada señala como fundamento para revocar la decisión de primera instancia que:

"El delito de apropiación ilícita es un delito especial propio que comete el ciudadano que habiendo recibido un bien mueble,

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

como una suma de dinero, no lo devuelve, entrega a otro o usa de la manera convenida a través de un contrato, por ejemplo de comisión, administración o depósito; haciéndolo suyo, en perjuicio de la persona que se lo entregó; quien generalmente es su propietario y en ocasiones quien tiene un derecho de crédito sobre dicho bien (...)

En el presente caso, según el Ministerio Público, la sentenciada en su condición de dependiente de la empresa agraviada recibió de los clientes de éste sumas de dinero en pago por las mercancías vendidas; dinero que no cumplió con entregar a su principal o empleadora; es decir, a la empresa agraviada; por tanto, queda claro que el dinero fue entregado en propiedad a la empresa agraviada, a través de su empleada, la sentenciada, sin que se advierta en dicho acto una obligación, a cargo de ésta, de hacer un uso determinado con dicho dinero, menos entregarlo a otro, pero menos aún de devolverlos a sus otorgantes".

3.2 Continúa el sustento de la sentencia argumentando que:

"Se sobreentiende que si la sentenciada fue una dependiente de la empresa agraviada, cuando los clientes de ésta cancelaron sus deudas no lo hicieron con la intención que aquella entregara el dinero a su principal, porque para ellos la cancelación se efectuó a la empresa misma, a través de la sentenciada; en consecuencia, respecto a ellos no se produjo ningún abuso de confianza ni perjuicio patrimonial; siéndoles ajena la diferencia surgida entra la empresa agraviada y su dependiente, la sentenciada; por tanto, no reconociéndose en la actuación de ésta, producto de la entrega del dinero, una obligación impuesta, por su relación con los clientes de la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN Nº 301-2011
LAMBAYEQUE**

empresa agraviada, de entregar a otro, hacer un uso determinado o devolver dicho dinero; la acción imputada es atípica del delito de apropiación.

Debe quedar claro entonces, contrariamente a lo postulado por el Ministerio Público, que la condición de sujeto pasivo en el delito de apropiación ilícita no se da en función de la persona a quien el sujeto activo se obliga a entregar un bien, sino en referencia a la persona que entrega dicho bien en posesión temporal, siempre que del título o contrato celebrado surja la obligación de entregarlo a otro".

CUARTO: PRECISIONES DOGMÁTICAS SOBRE LA APROPIACIÓN ILÍCITA O INDEBIDA.-

4.1 El primer predicado rector que define este tránsito de lo lícito a lo ilícito es la "apropiación", entendida esta como la incorporación a la esfera propia del patrimonio de aquello que fue recibido meramente a título posesorio¹.

4.2 El legislador identifica una serie de supuestos (aquellos en los que el sujeto ha llegado a la previa posesión de la cosa por un medio que no constituye infracción penal y que coincide con la recepción de la cosa merced a un título que produce la obligación de devolverla o entregarla) que resultan más graves que los anteriores, al implicar la vulneración, como consecuencia de la conducta apropiatoria, de una obligación de custodia y aplicación a un fin, que imprime a la dinámica comisiva una especial naturaleza fraudulenta: en ellos el autor se aprovecha de que tiene la posesión de la cosa, orientada al cumplimiento de esas obligaciones, para apropiarse de ella².

¹ MOLINS RAICH, Marc: "Consideraciones acerca del delito de apropiación indebida", <http://www.rocajunyent.com>.

² SIMONS VALLEJO, Rafael: Sobre el contenido injusto de los delitos de apropiación indebida (reflexiones a propósito de los arts. 252 y siguientes del Código Penal español), extraído de <http://www.uhu.es>.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

4.3 Lo que caracteriza a la posesión que da lugar a la apropiación indebida es que el sujeto tiene la cosa con conciencia de que aún siendo ajena, le corresponde alguna facultad sobre ella, siquiera sea delegada por otro (posesión por otro), con el que tiene un vínculo jurídico, como ocurre con el mandatario, el administrador, el representante legal entre otros³.

QUINTO: CRITERIO DOCTRINAL RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA DESDE LA PERSPECTIVA DEL BIEN JURÍDICO PROPIEDAD.-

5.1 Al respecto cabe indicar que en la dinámica del delito de apropiación ilícita hay que distinguir dos momentos, uno consistente en la transmisión legítima de la posesión de la cosa con título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, y otro de apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo, acaeciendo la infracción penal en este segundo momento. Es decir, que lo que se sanciona en el delito de apropiación ilícita en principio, es la transmutación que efectúa el sujeto activo de una posesión legítima al ejercicio de facultades inherentes a la propiedad del bien.

5.2 Por ello, existe en la conducta ilícita el incumplimiento de una obligación futura nacida de una relación legal o contractual. Este ilícito requiere necesariamente la preexistencia del poder de custodia sobre un bien por un título que produzca la obligación de entregar devolver o hacer un uso determinado.

5.3 Lo que fundamenta la mayor gravedad de la apropiación indebida es la ruptura de una obligación jurídica de devolución o entrega del objeto⁴. La conducta típica descrita tiene como

³ GONZÁLEZ RUS, J.J. Delitos contra el patrimonio, citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl: Derecho penal parte especial: tomo II, 3ra reimpresión, Lima, 2011, p. 286

⁴ PÉREZ MANZANO, Mercedes: Las defraudaciones (II). Apropiación indebida y defraudaciones del fluido eléctrico y análogas en Compendio de derecho penal

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

significado el disponer de la cosa como si fuera propia de manera que ello implica incumplimiento definitivo de la obligación de entrega o devolución⁵.

5.4 La existencia de una relación entre el autor y el objeto material del delito determina su connotación especial, en tanto solo puede ser sujeto activo aquél que ostente la relación jurídica exigida por el tipo del tipo penal⁶, esto es haber recibido el objeto de manera lícita en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado con el mismo.

5.5 La conducta esencial que debe desarrollar el agente está constituida por la apropiación, es decir, por el apoderamiento o adjudicación a su favor de un bien mueble que no le pertenece legalmente. Eso implica que el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca dentro de la esfera de su patrimonio *-bajo su dominio-* un bien mueble que sabe perfectamente que es ajeno, dado que le pertenece a otro, en su forma clásica, ese otro es quien por título lícito, le confió el bien por un tiempo y con un fin determinado.

5.6 La obligación de entregar debe cumplirse respecto a una tercera persona, es decir, distinta al sujeto de quien se recibió el bien mueble⁷. Con la apropiación ilícita se lesiona el derecho de propiedad que permite al propietario usar, disfrutar o disponer de sus bienes, dinero o valores⁸.

parte especial, Volumen II Coor. Bajo Fernández Miguel, Ed. Centro de estudios Ramón Areces S.A. Madrid, 1998, p. 478.

⁵ *Ibidem*, p. 481.

⁶ *Ibidem*, p. 484.

⁷ SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte Especial, Vol. II, 4ta edición, Ed. Grijley, Lima, 2010, p. 1020.

⁸ *Ibidem*, p. 1022.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

5.7 Víctima o sujeto del delito de apropiación ilícita será cualquier persona natural o jurídica con la única condición de ser la propietaria del bien mueble, dinero o valor entregado por título legítimo al agente, para después ser devuelto o entregado a una tercera persona o hacer un uso determinado del bien⁹.

SEXTO: CRITERIO DOCTRINAL RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA DESDE LA PERSPECTIVA DEL BIEN JURÍDICO PATRIMONIO.-

Frente al criterio doctrinal anterior se halla un segundo grupo de especialistas, ciertamente minoritario, que consideran que el delito de apropiación indebida no solamente castiga los actos de expolio o de expropiación en estado puro, caracterizados por la privación definitiva de la propiedad, sino que el bien jurídico protegido por este delito también incluye determinadas lesiones del patrimonio de modo que no solamente es la propiedad lo que se protege sino también el derecho de los acreedores a ver satisfecho su crédito de modo que las deslealtades o irregularidades más graves del acreedor, unidos a su insolvencia, colmarán el plus de desvalor material que justifican la tipificación y la sanción de tales conductas.

SÉPTIMO: ANTECEDENTE DOCTRINAL.-

7.1 En esencia, la distinción entre la postura en pro de la propiedad y la postura en favor del patrimonio radica en que, mientras que en la primera solamente se consideran típicas las conductas que cristalicen en una apropiación definitiva por la integración del bien en la esfera de dominio del sujeto activo, en la segunda, esto es, en la postura que defiende la tipicidad de determinadas formas de lesión del patrimonio se considera que el referido precepto contempla dos infracciones penales de distinta naturaleza: las que atacan

⁹ *Ibíd.*, p. 1024.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

directamente contra la noción de propiedad y las que eventualmente puedan atentar contra el patrimonio criminalizando determinadas lesiones del derecho de crédito que por sus circunstancias puedan considerarse especialmente reprochables¹⁰.

7.2 Con el Código de Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo número ciento veinticuatro, las causas por delito de apropiación ilícita se tramitaban como procesos sumarios, de modo que no eran conocidas de manera común por la Suprema Corte. No obstante, la Corte Suprema se ha pronunciado, así, en la Ejecutoria recaída en el recurso de nulidad número mil doscientos noventa y seis guión dos mil seis, Lambayeque, de dieciocho de abril de dos mil once, ya referida, no obstante no existir pronunciamiento de fondo, no se cuestiona que los griferos que se apoderan del dinero recibido por pago de combustible desplegaran conducta de apropiación, en agravio del Grupo Empresarial propietario del grifo.

OCTAVO: ADOPCIÓN DE POSTURA JURISPRUDENCIAL.-

8.1 Es claro que cuando una persona entrega a otra un bien mueble con un encargo específico, y éste último queda en calidad de depositario, (en custodia legítima del bien), lo expolia y lo agrega a su dominio patrimonial, la víctima o sujeto pasivo resulta siendo quien entregó la cosa.

8.2 Cuando la cosa mueble se entrega en pago al autorizado de facto o formalmente (con conocimiento del acreedor conforme a las reglas del Código Civil), el que paga se desliga del bien entregado y éste se incorpora a la esfera del patrimonio (en propiedad) del antes acreedor, en cuyo nombre el agente cobrador o recaudador lo recibió.

¹⁰ MOLINS RAICH, Marc: *Op.cit.* <http://www.rocajunyent.com>.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

8.3 Es preciso distinguir entre el cajero que opera en la sede o domicilio del acreedor, del recaudador que cobra en el domicilio del deudor o recibe en su propio y particular domicilio el bien en pago total o parcial del crédito.

8.4 En los dos últimos casos, no es factible asumir que el recaudador sustrae los bienes recibidos para apropiárselos -lo que es característico del hurto-, sino que, simplemente decide quedárselos para sí, incumpliendo el deber de entrega al propietario, cuya confianza defrauda.

8.5 A mayor abundamiento, el legislador nacional ha previsto el delito de apropiación ilícita irregular en el artículo ciento noventa y dos del Código Penal, que sanciona a quien se apropia de un bien perdido, de un tesoro, o de un bien ajeno en cuya tenencia entró el agente por error, caso fortuito u otra causa independiente de su voluntad. Siguiendo la línea de la regla jurídica interpretativa "*ad maiorem ad minus*", si quien se apropia de un bien que carece de dueño, merece sanción penal por delito de apropiación indebida irregular, con mayor motivo, tiene que serlo quien se apropia de bienes ajenos que pertenecen a dueño cierto.

8.6 No hay por tanto en el asunto *sub judice*, ni vacío legal ni posibilidad de aplicación del tipo de hurto, en cuyo caso extraordinario, tampoco cabría -como lo señala el Ministerio Público en el presente proceso penal- una absolución; ocurre que el tipo de apropiación indebida o ilícita, comprende como agraviado, en principio, al dueño de la cosa apropiada, cuando éste fuera quien entrega, al acreedor insatisfecho, en cuyo nombre el sujeto activo no recibe el bien, en los casos de recibo de pago total o parcial, situación que la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha adoptado.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

8.7 Es probable que en determinados casos concorra alguna falsedad o falsificación con la conducta apropiatoria, hecho que se debe evaluar como corresponde.

8.8 No es posible para este Colegiado Supremo definir el fondo de la materia, dado que no se cuenta con los actuados del proceso, de modo que corresponde reenviar al Órgano Jurisdiccional llamado por ley, para que efectúe el juicio de apelación, definiendo si se produjo o no una apropiación lícita considerando sus particularidades y efectos.

DECISIÓN:

Por todo ello, administrando justicia a nombre del Pueblo, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República **ACORDAMOS:**

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lambayeque, en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de veintitrés de agosto de dos mil once emitida por la Primera Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, obrante en los folios sesenta y dos a sesenta y siete del cuaderno acompañado, que revocó la sentencia emitida por el Juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo que condenó a doña Jalli Jannan Villarreal López como autora del delito de apropiación ilícita, en agravio de la empresa Rinti Sociedad Anónima y reformándola, la absolvió de los cargos formulados en su contra.

II. DISPONER: que se devuelva el proceso al Órgano Jurisdiccional de origen, y se lleve a cabo el juicio de apelación conforme a ley.

III. MANDAR: que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y las demás Cortes Superiores de los Distritos Judiciales en los que se encuentra en vigencia el Código

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 301-2011
LAMBAYEQUE**

Procesal Penal, consideren como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en los acápites 8.1 a 8.6 del considerando octavo de la presente Ejecutoria Suprema, de conformidad con el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal.

IV. ORDENAR la transcripción de la presente Ejecutoria a las Cortes Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su conocimiento y fines, y se publique en el diario oficial "El Peruano".

Interviene el señor Juez Supremo Santa María Morillo por el periodo vacacional del señor Juez Supremo Villa Stein.

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

NEYRA FLORES

SANTA MARIA MORILLO

JS/sd

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA

04 FEB 2013

APÉNDICE

FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACION ILICITA NO TIFICADAS EN EL CODIGO PENAL PERUANO



En la experiencia vivida en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el que hacer diario de impartir justicia, hemos experimentado que hay hechos o conductas que el Código Penal Peruano no ha previsto o tipificado como Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita, lo cual dificulta la solución inmediata de este hecho ilícito cuando se trata de apropiación ilícita de bien mueble, suma de dinero u otros valores de mínima cuantía, vale decir cuyo valor no

sobrepase de una remuneración mínima vital; si bien es cierto, estos supuestos de hecho se encuentran previstos en el Código Penal como Delito de apropiación ilícita; sin embargo, este Delito tiene que someterse a un trámite ante un Juzgado Especializado en lo Penal con sede en la capital de la Provincia respectiva según las normas del procedimiento sumario en un tiempo lato, con mayor costo económico y de tiempo.

Pero si este mismo supuesto fáctico se logra tipificarse como Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita delimitada por razón de cuantía cuyo valor no sobrepase a una remuneración mínima vital, el hecho ilícito sería de competencia del Juzgado de Paz Letrado o de Paz del Distrito o Centro Poblado menor, según sea el caso, que sometido a un Procedimiento Especial sobre Faltas se resolvería el hecho controvertido en una audiencia única, o en un tiempo muy breve, de esta manera se lograría la tutela jurisdiccional efectiva en beneficio de los justiciables, ante un Juzgado mas cercano de la sede de sus domicilios, cuyo bien mueble de valor insignificante haya sido apropiado; ya que calculando los costos y beneficios, nos parece exagerado con el consecuente perjuicio económico que ocasiona al Estado y a los justiciables, ventilar todo un proceso penal con plazos latos de investigación para hechos punibles que en la actualidad son considerados como delitos de apropiación ilícita, porque en nuestra legislación penal no se encuentra prevista como Faltas. Por tales consideraciones existe la imperiosa necesidad de incorporar en el Código Penal, las Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita, lo que implica la proposición de un proyecto de ley.

El Código Penal ha de ser para todos, por consiguiente en la configuración de hechos punibles debe tenerse en cuenta la realidad socio económica donde viven la mayoría de las personas y de esa manera optar por las soluciones más razonables cuando surjan hechos controvertidos, más aún que en la actualidad se haba de inclusión social, y el servicio de justicia no está ajena a esta medida política que permita el acercamiento de la justicia a este sector de la población desfavorecida .

Las cuestiones sin solución que se tiene respecto de las conductas no tipificadas que se presentan en la realidad fáctica y que en la legislación comparada sí han sido tipificadas como Faltas a diferencia del Código Penal Peruano, en la que se tiene vacíos en la previsión de Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita de bien mueble, suma de dinero de mínima cuantía; en el Código Penal Peruano, Libro Segundo que regula sobre los Delitos, encontramos en el rubro de Delitos Contra el Patrimonio, la modalidad de apropiación ilícita; y no

así en el Libro Tercero del cuerpo normativo mencionado, como Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita; que teniendo en cuenta el criterio cuantitativo de bienes muebles de mínima cuantía, debería de haberse tipificado como Faltas de apropiación ilícita cuando la cuantía no sobrepase de una remuneración mínima vital, como se hace la tipificación de las Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Simple, Hurto de Ganado y Daños hasta el límite de la cuantía señalada. Ante esta problemática, lo que ocurre en la praxis judicial, es que al no estar tipificados los supuestos de hecho cometidos como Faltas, tiene que tramitarse ante un Juez Penal, no obstante cuando el bien mueble apropiado tenga el valor de un nuevo sol; o en el mejor de los casos para resolver este hecho controvertido el Juez de Paz Letrado o de Paz tiene que buscar una solución a través de una conciliación o transacción, contraviniendo el Principio de Legalidad.

Ante la incidencia de la comisión y denuncias de hechos de apropiación ilícita recaído sobre bien mueble, suma de dinero u otro valor cuya cuantía no sobrepase de una remuneración mínima vital (de insignificante valor económico), que se cometen en el contexto social de la Provincia de Abancay, y que por la naturaleza del hecho también se hace extensiva al contexto de la realidad nacional; es necesario que la Política Criminal adoptada por el Estado Peruano tenga una base antropológica y realista en el conocimiento de la realidad social donde se cometen estos hechos, para crear tipos penales en el Código Penal, y garantizar los derechos de los justiciables.

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY.

Considerando la necesidad de los justiciables de una atención rápida y sencilla en la solución del caso controvertido derivado de conductas que pudieran ser tipificado como Faltas Contra el Patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita cuando recaen en bien mueble, suma de dinero u otro valor cuya cuantía no sobrepase de una remuneración mínima vital, es necesario proponer un proyecto legislativo para que en el futuro el legislador pueda crear esa modalidad de Faltas Contra el Patrimonio, teniendo en cuenta el elemento cuantitativo, tanto mas que en la actualidad hay una comisión revisora de reforma del Código Penal; proponemos el siguiente proyecto de tipo penal para ser incorporado en nuestro Código Penal:

Artículo (): "El que realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 190, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas o con sesenta a ciento veinte días-multa".